

53

EXPTE.:2371/18 - JUICIO: MAEBA S.R.L. C/ PEREYRA HECTOR HUGO S/
COBRO EJECUTIVO (RDS-RECUS.S/CAUSA DEMANDADO-ORIGEN JUZ.
DOC. Y LOC. VII NOM.)

San Miguel de Tucumán, ^M de febrero de 2019.- 1) Por recibidos los autos. Hágase conocer a las partes intervinientes que la Proveyente, entenderá en la presente causa. **PERSONAL.** 2) Requiérase al Juzgado de origen la documentación original que se encuentra reservada en caja fuerte de Secretaría. ((P-2-18). A tal fin, librese oficio. 3) De las excepciones opuestas por el demandado, dése traslado a la parte actora por el término de cinco días. **PERSONAL.** 5) Líbrese los oficio como se encuentran ordenados a fs. 40.

FDO: DRA. MARIA VICTORIA GOMEZ TACCONI - JUEZ- JEN - 2371/18

DRA. MARIA VICTORIA GOMEZ TACCONI
JUEZ
JUZGADO CIVIL EN DOC.Y LOC. 2º NOM

Calles
Oficio

20, 02, 2019
EN..... SE LIBRO CEDULA.....
DEPARTAMENTO DE MOTIVOS
DEPARTAMENTO DE MOTIVOS
DEPARTAMENTO DE MOTIVOS

12) 25/2/19

EN 22.2.19 SE FIRMA/N 4 OFICIO/S
QUEDANDO A DISPOSICION DE LA P
INTERESADA PARA SU DILIGENCIAMIENTO





Expte: 2371/18



39EFRRTT

PODER JUDICIAL DE TUCUMAN

CEDULA DE NOTIFICACION

San Miguel de Tucumán, 20 de febrero de 2019.-

Juzgado: DOCUMENTOS Y LOCACIONES - 2º NOMINACION

sito en Avda. 24 de Septiembre nº677 - piso 3 - S.M. de Tucumán

Autos: **MAEBA S.R.L. C/ PEREYRA HECTOR HUGO S/ COBRO EJECUTIVO (RDS-RECUS.S/CAUSA DEMANDADO-ORIGEN JUZ. DOC. Y LOC. VII NOM.). - Expte. nº: 2371/18**

Señor : Dr. GUSTAVO RUBEN OBELAR (APODERADO de MAEBA S.R.L.)
Domicilio: **CASILLERO Nº 2181.**

PROVEIDO

San Miguel de Tucumán, 14 de febrero de 2019.- 1) Por recibidos los autos. Hágase conocer a las partes intervinientes que la Proveyente, entenderá en la presente causa. **PERSONAL. 2) ... 3)** De las excepciones opuestas por el demandado, dése traslado a la parte actora por el término de cinco días. **PERSONAL.-...- FDO: DRA. MARIA VICTORIA GOMEZ TACCONI - JUEZ. QUEDA USTED NOTIFICADO.-** Se adjuntan copias para traslado en 5 fs. .- PT 2371/18

DRA. MARIA DEL V. ANTONIO DE MONTIVERO
SECRETARIA
DEL JUZ. CIV. EN DOC. Y LOC. DE LA IIA. NOM.

M.E.Nº RECIBIDO HOY DE 2.018.-
Para su cumplimiento pase al Oficial Notificador Sr.

San Miguel de Tucumán de En la fecha
siendo horas Notifiqué del contenido de esta cédula.-

JOSE ANTONIO SOSA
PROSECRETARIO CAT. C
CASILLERO DE NOTIFICACIONES
CENTRO JUDICIAL CAPITAL

55



Expte: 2371/18



39PSCDXT

PODER JUDICIAL DE TUCUMAN

CEDULA DE NOTIFICACION

San Miguel de Tucumán, 20 de febrero de 2019.-

Juzgado: DOCUMENTOS Y LOCACIONES - 2º NOMINACION

sito en Avda. 24 de Septiembre nº677 - piso 3 - S.M. de Tucumán

Autos: **MAEBA S.R.L. C/ PEREYRA HECTOR HUGO S/ COBRO EJECUTIVO (RDS-RECUS.S/CAUSA DEMANDADO-ORIGEN JUZ. DOC. Y LOC. VII NOM.). - Expte. nº: 2371/18**

Señor : Dr. CESAR LUIS ROBLES (APODERADO (BENEFICIO P/LITIGAR S/GASTOS) de PEREYRA HECTOR HUGO)
Domicilio: **CASILLERO Nº 126.**

PROVEIDO

San Miguel de Tucumán, 14 de febrero de 2019.- 1) Por recibidos los autos. Hágase conocer a las partes intervinientes que la Proveyente, entenderá en la presente causa. **PERSONAL.** -.....- FDO: DRA. MARIA VICTORIA GOMEZ TACCONI - JUEZ. QUEDA USTED NOTIFICADO.-

PT 2371/18

DRA. MARIA DEL V. ANTONIO DE MONTIVERO
SECRETARIA
DEL JUZ. CIV. EN DOC. Y LOC. DE LA IIA. NOM.

29 FEB 2019

M.E.Nº RECIBIDO HOY DE 2.018.-
Para su cumplimiento pase al Oficial Notificador Sr.

San Miguel de Tucumán de En la fecha
siendo horas Notifiqué del contenido de esta cédula.-

CPN. I.A. DEL MILAGRO ZELARAYAN
SECRETARIA - MES. DE ENTRADA CIVIL
CASILLERO DE NOTIFICACIONES PODER JUDICIAL

Secretario Jefe

126
M

56

MAEBA SRL (RAPICUOTAS)
CUIT 30-71150193-9 - DOMICILIO SOCIAL: CALLE 70 N° 882 La Plata.

INFORMACIÓN AL CLIENTE Y CONTRATO DE MUTUO
CONDICIONES GENERALES DE SUSCRIPCION DE TITULARES Y SOLICITUD DE PRESTAMOS.

CLIENTE/TITULAR:

APELLIDO Y NOMBRE: PEREYRA, HECTOR HUGO
CUIL/CUIT/CDI: 20-13853051-6 DNI/ LC/ LE: 13.853.051
FECHA DE NACIMIENTO: 03/ 03/ 1961 NACIONALIDAD:
ESTADO CIVIL:
DOMICILIO PARTICULAR: R. 25. VIVIENDAS. CASA 7. SIN NRO. ENTRE Y
LOCALIDAD: GRANEROS (TUC.) PROVINCIA: TUCUMÁN
TELEFONO FIJO: TELEFONO CELULAR:

Solicito a MAEBA SRL con domicilio en Salle 173 el otorgamiento de un préstamo personal, sujeto a su aprobación definitiva bajo las CONDICIONES GENERALES DE CRÉDITO que seguidamente se detallan:

CONDICIONES DE OTORGAMIENTO

1.- GASTOS E IMPUESTOS

- 1.1 Gastos administrativos: 139/- x Ja
1.2 Verificación domiciliaria:
1.3 I.V.A. sobre interés:
1.4 Información de riesgo crediticio:
1.5 Seguro de vida en caso de corresponder:
1.6 Gastos de gestión de cobranza en caso de corresponder:

2.- DATOS DEL PRESTAMO

- 2.1 Monto solicitado: 10.000
2.2 Monto financiado: 9.800
2.3 Cantidad de pagos: 8
2.4 Importe de los pagos: 2.100
2.5 Vencimiento del primer pago: 17/ 6 /2016
2.6 Vencimiento de los restantes pagos: cada treinta días del vencimiento del primer pago
2.7 Número del plan: 3-81
2.8 Tasa de interés efectiva anual (TEA): 94,73%
2.9 Costo financiero total (CFTNA) c/I.V.A.: 99,60%
(CFTNA) s/I.V.A.: 82,31%
2.10 Sistema de amortización: CAPITAL CONSTANTE
2.11 Intereses punitivos en caso de corresponder:
2.12 Sucursal:
2.13.- Número de operación comercial
2.14.- Los desembolsos serán netos de todo cargo que MAEBA SRL determine corresponda, a saber: retenciones, impuestos, gastos, comisiones o cualquier otro cargo aplicable.

3.- El importe correspondiente al desembolso del préstamo, en caso de ser aprobado, deberá ser abonado al suscripto, y el recibo de este último por el importe en cuestión perfeccionará el cumplimiento de esta solicitud de PRESTAMO por parte de MAEBA SRL.

4.- Declaro bajo juramento que estoy en pleno ejercicio de mis derechos civiles y que la totalidad de la documentación e información que suministro a MAEBA SRL es real y fidedigna, de no ser así se considerará el suministro de la misma como incumplimiento contractual, habilitando a MAEBA SRL a realizar los reclamos y/o acciones correspondientes.

5.- En garantía del préstamo, suscribiré un pagaré a la vista a favor de MAEBA SRL exigible ante cualquier incumplimiento del presente, confiriendo a su vez la vía ejecutiva al presente, por lo que MAEBA SRL podrá iniciar la ejecución con cualquiera de los documentos.

6.- Domicilio de pago. Todos los pagos que deba efectuar, los realizaré en el domicilio de MAEBA SRL, sito en Salle 173, ciudad La Plata, en horario y día hábil o, en su defecto, donde este lo indique en el futuro, bajo el mecanismo establecido en la cláusula 7.

7.- Cesión: Todos los derechos a favor de MAEBA SRL, conforme al presente podrán ser cedidos sin necesidad de notificar al deudor cedido en los términos del artículo 72 inc. (a) de la ley 24.441, cuando tal cesión tuviera por objeto garantizar la emisión de títulos valores mediante oferta pública, constituir el activo de una sociedad (o de un fideicomiso) con el objeto de que emita títulos valores ofertables públicamente y cuyos servicios de amortización e intereses estén garantizados con dicho activo, y/o constituir el patrimonio de un fondo común de créditos. MAEBA SRL podrá ceder los derechos y créditos dispuestos en el presente, sin necesidad de notificarme, sin restricciones de ningún tipo, ni autorización en particular.

8.- SEGUROS: En caso de exigirlo la normativa vigente, MAEBA SRL me ofrecerá la posibilidad de elegir entre distintas compañías aseguradoras debidamente autorizadas para operar en el mercado, por una suma asegurada equivalente al importe del PRESTAMO solicitado más intereses, siendo MAEBA SRL el beneficiario de dicho seguro, que se contratará conforme a las normas legales. El costo del seguro estará exclusivamente a mi cargo, debiendo abonar los importes respectivos a la prima del seguro contratado al momento de la liquidación del PRESTAMO o cuando MAEBA SRL lo disponga.

MORA

8.- La mora en el pago de las cuotas como así también de cualquier obligación adicional convenida, se producirá de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos acordados, sin necesidad de aviso previo alguno, judicial o extrajudicial. Producida la mora, la deuda se tendrá como de plazo vencido y MAEBA SRL podrá exigir el pago íntegro de todo lo adeudado, ya sea en concepto de capital, intereses, gastos y demás accesorios.

STAVO R. OBELAR
ABOGADO
M.P. N° 4656 - L°K - P 347

9. Producida la mora, y por todo el tiempo que dure la misma, deberá abonar un Interés punitorio, cuya tasa será del% (.....) de los Intereses compensatorios pactados, los que se adicionarán a estos últimos.

10.- MAEBA SRL no estará obligado a recibir pagos parciales y, si lo hiciera, estos en ningún modo cancelarán las obligaciones del presente, hasta tanto MAEBA SRL no reciba la obligación completa adeudada. Los pagos parciales y/o entrega de dinero a cuenta, luego de operada la mora, no implicarán en ningún caso quita, espera, remisión o novación de las obligaciones o acciones.

11.- Los codeudores que suscriban eventualmente el presente, asumen la total responsabilidad por las obligaciones a cargo del CLIENTE (tomador del préstamo) en calidad de tales. Los codeudores, se constituyen en obligados en forma personal y solidaria, además de lisa, llanos y principales pagadores del deudor con la totalidad de sus bienes, renunciando desde ya, a los derechos de división y excusión, conforme los artículos 1590, 1591 del Código Civil, por la totalidad de las obligaciones contenidas en la presente solicitud, por lo que constituyen domicilio especial a estos efectos en el indicado al pie del presente

DECLARACIONES

12.- AUTORIZACION EXPRESA: Autorizo expresamente a MAEBA SRL para que en caso de incumplimiento en el pago de las operaciones realizadas entre el TITULAR y la misma, trabé el embargo de mis haberes, renunciando expresamente a los beneficios que otorga el art. 744 inc h) del CCCN, el decreto 6754/43 ratificado por ley 13.894; y/o ley 24.241, como asimismo de cualquier otra ley, sea de carácter nacional o provincial, creada o a crearse, que otorgue iguales o similares beneficios a los concedidos por las citadas leyes y/o decretos. La renuncia que por este acto se efectúa es comprensiva del capital, Intereses que pudiere devengar dicha suma, sean éstos moratorios o punitorios, como así también por los gastos, honorarios y aportes de carácter judicial o extrajudicial emergentes del incumplimiento de la obligación.

Autorizo en forma expresa a MAEBA SRL Y/O RESPONSABLES a efectuar llamadas, enviar mensajes de texto y/o audio a los números telefónicos denunciados oportunamente como medio de contacto. Dichas llamadas serán efectuadas en días hábiles y horarios razonables, renunciado expresamente a invocar los beneficios que establece la Ley 24.240 (Defensa del Consumidor), Ley 25.326 (Protección de Datos Personales) y/o Ley 26.951.

13.- CONSENTIMIENTO DEL INFORME DE DATOS PERSONALES: DECLARO BAJO JURAMENTO que los responsables de MAEBA SRL, con domicilio en calle 70 N° 882 de la ciudad de La Plata, me han informado previamente y notificado del contenido del art. 6 de la ley 25.326 de Protección de datos personales - Habeas Data, motivo por el cual es de mi conocimiento que mis datos personales relacionados con las operaciones que concertaré con la mencionada firma serán inmediatamente informados y registrados en la base de datos de informes comerciales que la empresa determine, quien suministrará información comercial relativa a la solvencia económica y al crédito a sus asociados abonados con la finalidad que estos puedan evaluar y decidir sobre el eventual otorgamiento del crédito, por lo que impuesto de todo ello PRESTO CONSENTIMIENTO para que mis datos y antecedentes personales, laborales, comerciales, financieros o de otra índole (salvo los previstos en el art. 7 de la mencionada ley), así como mis eventuales incumplimientos, sean registrados en la base de datos de la mencionada y puedan ser cedidos a sus asociados abonados.

14.- En caso de efectivizarse el préstamo solicitado, cuando sea cancelado, me comprometo a retirar de la oficina donde se halla radicado, el pagaré suscripto oportunamente. De no realizar dicho trámite dentro de los ciento ochenta (180) días de haberse cancelado la deuda, autorizo a MAEBA SRL a que proceda a su destrucción de oficio.

15.- La/las firma/s en el presente obrará/obrarán como constancia plena para MAEBA SRL de que he recibido copia de la presente solicitud.

16.- PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO: En cumplimiento de las leyes y normas particulares emanadas de la Unidad de Información Financiera (UIF), las que declaro conocer y aceptar, declaro bajo juramento que: 1.- la información y datos identificatorios consignados en la presente solicitud y demás documentación anexa, son exactos y verdaderos 2.- Los fondos y valores a utilizar para el repago de las obligaciones contempladas en esta solicitud, tienen origen en actividades lícitas. 3.- La documentación respaldatoria presentada en virtud de la citada norma es copia fiel del original.

17.- PUBLICIDAD: Presto mi irrestricto consentimiento expreso a los fines de que mis datos personales de contacto sean utilizados en campañas publicitarias a desarrollar por la firma por medios escritos, mensajería, SMS, llamados telefónicos u otra modalidad similar, en los términos del art. 8 inc. c) de la Ley 26951, su normativa complementaria y/o modificatoria.

18.- Jurisdicción. En caso de controversia judicial, constituyo domicilio en los indicados en esta solicitud y acepto expresamente la competencia de los Juzgados Ordinarios Nacionales de Primera Instancia en lo Civil y Comercial con asiento en la Ciudad de San Miguel de Tucumán, con exclusión de todo otro fuero o jurisdicción.

Lugar 12/05/2016

Fecha

Declaro haber leído y que se me ha informado el contenido de la presente Información.

Firma

Aclaración

DNI

Domicilio

Firma

Aclaración

DNI

Domicilio

CONSTANCIA DE ENTREGA

Recibí de conformidad de MAEBA SRL la suma de pesos (\$.....) por la operación Número También manifiesto mi conformidad con la recepción del producto En los términos del artículo 58 del Decreto Reglamentario de la Ley 23.349 del Impuesto al valor agregado o el que en el futuro lo reemplace.

Firma

Aclaración

DNI

Domicilio

Firma

Aclaración

DNI

Domicilio

Dr. GUSTAVO R. OBELAR
ABOGADO
M.P. N° 4856 - L° K - P° 347

MAEBA SRL (RAPICUOTAS)
CUIT 30-71150193-9 - DOMICILIO SOCIAL: CALLE 70 N° 882 La Plata.

INFORMACIÓN AL CLIENTE Y CONTRATO DE MUTUO
CONDICIONES GENERALES DE SUSCRIPCIÓN DE TITULARES Y SOLICITUD DE PRESTAMOS.

CLIENTE/TITULAR:

APELLIDO Y NOMBRE: PEREYRA HECTOR HUGO

CUIL/CUIT/CDI: 20-13853051-6 DNI/ LC/ LE: 13.853.051

FECHA DE NACIMIENTO: 03/ 03/ 1961 NACIONALIDAD:

ESTADO CIVIL:

DOMICILIO PARTICULAR: B° 25 VIVIENDAS CASA 7 S/N NRO. ENTRE Y

LOCALIDAD: GRANEROS (TUC.) PROVINCIA: TUCUMÁN

TELEFONO FIJO: TELEFONO CELULAR:

Solicito a MAEBA SRL con domicilio en SALA 173 el otorgamiento de un préstamo personal, sujeto a su aprobación definitiva bajo las CONDICIONES GENERALES DE CRÉDITO que seguidamente se detallan:

CONDICIONES DE OTORGAMIENTO

1.- GASTOS E IMPUESTOS

- 1.1 Gastos administrativos: 1,23% + IVA
- 1.2 Verificación domiciliaria:
- 1.3 I.V.A. sobre interés:
- 1.4 Información de riesgo crediticio:
- 1.5 Seguro de vida en caso de corresponder:
- 1.6 Gastos de gestión de cobranza en caso de corresponder:

2.- DATOS DEL PRÉSTAMO

- 2.1 Monto solicitado: 20000
- 2.2 Monto financiado: 18460
- 2.3 Cantidad de pagos: 9
- 2.4 Importe de los pagos: 2040
- 2.5 Vencimiento del primer pago: 9/9/2016
- 2.6 Vencimiento de los restantes pagos: cada treinta días del vencimiento del primer pago
- 2.7 Número del plan: 3-91
- 2.8 Tasa de interés efectiva anual (TEA): 77,39%
- 2.9 Costo financiero total (CFTNA) C/IVA: 71,47%
(CFTNA) s/IVA: 82,20%
- 2.10 Sistema de amortización: SALA CONSTANTE
- 2.11 Intereses punitorios en caso de corresponder:
- 2.12 Sucursal:
- 2.13.- Número de operación comercial
- 2.14.- Los desembolsos serán netos de todo cargo que MAEBA SRL determine corresponda, a saber: retenciones, impuestos, gastos, comisiones o cualquier otro cargo aplicable.

3.- El importe correspondiente al desembolso del préstamo, en caso de ser aprobado, deberá ser abonado al suscripto, y el recibo de este último por el importe en cuestión perfeccionará el cumplimiento de esta solicitud de PRÉSTAMO por parte de MAEBA SRL.

4.- Declaro bajo juramento que estoy en pleno ejercicio de mis derechos civiles y que la totalidad de la documentación e información que suministro a MAEBA SRL es real y fidedigna, de no ser así se considerará el suministro de la misma como incumplimiento contractual, habilitando a MAEBA SRL a realizar los reclamos y/o acciones correspondientes.

5.- En garantía del préstamo, suscribiré un pagaré a la vista a favor de MAEBA SRL exigible ante cualquier incumplimiento del presente, confiriendo a su vez la vía ejecutiva al presente, por lo que MAEBA SRL podrá iniciar la ejecución con cualquiera de los documentos.

6.- Domicilio de pago. Todos los pagos que deba efectuar, los realizaré en el domicilio de MAEBA SRL, sito en SALA 173, ciudad NEUQUÉN, en horario y día hábil o, en su defecto, donde este lo indique en el futuro, bajo el mecanismo establecido en la cláusula 7.

7.- Cesión: Todos los derechos a favor de MAEBA SRL, conforme al presente podrán ser cedidos sin necesidad de notificar al deudor cedido en los términos del artículo 72 inc. (a) de la ley 24.441, cuando tal cesión tuviera por objeto garantizar la emisión de títulos valores mediante oferta pública, constituir el activo de una sociedad (o de un fideicomiso) con el objeto de que emita títulos valores ofertables públicamente y cuyos servicios de amortización e intereses estén garantizados con dicho activo, y/o constituir el patrimonio de un fondo común de créditos. MAEBA SRL podrá ceder los derechos y créditos dispuestos en el presente, sin necesidad de notificarme, sin restricciones de ningún tipo, ni autorización en particular.

8.- SEGUROS: En caso de exigirlo la normativa vigente, MAEBA SRL me ofrecerá la posibilidad de elegir entre distintas compañías aseguradoras debidamente autorizadas para operar en el mercado, por una suma asegurada equivalente al importe del PRÉSTAMO solicitado más intereses, siendo MAEBA SRL el beneficiario de dicho seguro, que se contratará conforme a las normas legales. El costo del seguro estará exclusivamente a mi cargo, debiendo abonar los importes respectivos a la prima del seguro contratado al momento de la liquidación del PRÉSTAMO o cuando MAEBA SRL lo disponga.

MORA

8.- La mora en el pago de las cuotas como así también de cualquier obligación adicional convenida, se producirá de pleno derecho por el sólo vencimiento de los plazos acordados, sin necesidad de aviso previo alguno, judicial o extrajudicial. Producida la mora, la deuda se tendrá como de plazo vencido y MAEBA SRL podrá exigir el pago íntegro de todo lo adeudado, ya sea en concepto de capital, intereses, gastos y demás accesorios.

Dr. GUSTAVO R. OBELAR
ABOGADO
M.P. N° 4656 - L°K - P 347

SP

9. Producida la mora, y por todo el tiempo que dure la misma, deberá abonar un interés punitorio, cuya tasa será del% (.....) de los intereses compensatorios pactados, los que se adicionarán a estos últimos.

10.- MAEBA SRL no estará obligado a recibir pagos parciales y, si lo hiciera, estos en ningún modo cancelarán las obligaciones del presente, hasta tanto MAEBA SRL no reciba la obligación completa adeudada. Los pagos parciales y/o entrega de dinero a cuenta, luego de operada la mora, no implicarán en ningún caso quita, espera, remisión o novación de las obligaciones o acciones.

11.- Los codeudores que suscriban eventualmente el presente, asumen la total responsabilidad por las obligaciones a cargo del CLIENTE (tomador del préstamo) en calidad de tales. Los codeudores, se constituyen en obligados en forma personal y solidaria, además de lisos, llanos y principales pagadores del deudor con la totalidad de sus bienes, renunciando desde ya, a los derechos de división y excusión, conforme los artículos 1590, 1591 del Código Civil, por la totalidad de las obligaciones contenidas en la presente solicitud, por lo que constituyen domicilio especial a estos efectos en el indicado al pie del presente

DECLARACIONES

12.- AUTORIZACION EXPRESA: Autorizo expresamente a MAEBA SRL para que en caso de incumplimiento en el pago de las operaciones realizadas entre el TITULAR y la misma, trabé el embargo de mis haberes, renunciando expresamente a los beneficios que otorga el art. 744 inc h) del CCCN, el decreto 6754/43 ratificado por ley 13.894; y/o ley 24.241, como asimismo de cualquier otra ley, sea de carácter nacional o provincial, creada o a crearse, que otorgue iguales o similares beneficios a los concedidos por las citadas leyes y/o decretos. La renuncia que por este acto se efectúa es comprensiva del capital, intereses que pudiere devengar dicha suma, sean éstos moratorios o punitivos, como así también por los gastos, honorarios y aportes de carácter judicial o extrajudicial emergentes del incumplimiento de la obligación.

Autorizo en forma expresa a MAEBA SRL Y/O RESPONSABLES a efectuar llamadas, enviar mensajes de texto y/o audio a los números telefónicos denunciados oportunamente como medio de contacto. Dichas llamadas serán efectuadas en días hábiles y horarios razonables, renunciado expresamente a invocar los beneficios que establece la Ley 24.240 (Defensa del Consumidor), Ley 25.326 (Protección de Datos Personales) y/o Ley 26.951.

13.- CONSENTIMIENTO DEL INFORME DE DATOS PERSONALES. DECLARO BAJO JURAMENTO que los responsables de MAEBA SRL, con domicilio en calle 70 N° 882 de la ciudad de La Plata, me han informado previamente y notificado del contenido del art. 6 de la ley 25.326 de Protección de datos personales - Habeas Data, motivo por el cual es de mi conocimiento que mis datos personales relacionados con las operaciones que concertaré con la mencionada firma serán inmediatamente informados y registrados en la base de datos de informes comerciales que la empresa determine, quien suministrará información comercial relativa a la solvencia económica y al crédito a sus asociados abonados con la finalidad que estos puedan evaluar y decidir sobre el eventual otorgamiento del crédito, por lo que inquirido de todo ello PRESTO CONSENTIMIENTO para que mis datos y antecedentes personales, laborales, comerciales, financieros o de otra índole (salvo los previstos en el art. 7 de la mencionada ley), así como mis eventuales incumplimientos, sean registrados en la base de datos de la mencionada y puedan ser cedidos a sus asociados abonados.

14.- En caso de efectivizarse el préstamo solicitado, cuando sea cancelado, me comprometo a retirar de la oficina donde se halla radicado, el pagaré suscripto oportunamente. De no realizar dicho trámite dentro de los ciento ochenta (180) días de haberse cancelado la deuda, autorizo a MAEBA SRL a que proceda a su destrucción de oficio.

15.- La/las firma/firmas en el presente obra/obrarán como constancia plena para MAEBA SRL de que he recibido copia de la presente solicitud.

16.- PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO: En cumplimiento de las leyes y normas particulares emanadas de la Unidad de Información Financiera (UIF), las que declaro conocer y aceptar, declaro bajo juramento que: 1.- la información y datos identificatorios consignados en la presente solicitud y demás documentación anexa, son exactos y verdaderos 2.- Los fondos y valores a utilizar para el repago de las obligaciones contempladas en esta solicitud, tienen origen en actividades lícitas. 3.- La documentación respaldatoria presentada en virtud de la citada norma es copia fiel del original.

17.- PUBLICIDAD: Presto mi irrestricto consentimiento expreso a los fines de que mis datos personales de contacto sean utilizados en campañas publicitarias a desarrollar por la firma por medios escritos, mensajería, SMS, llamados telefónicos u otra modalidad similar, en los términos del art. 8 inc. e) de la Ley 26951, su normativa complementaria y/o modificatoria.

SAN MIGUEL DE TUCUMAN

18.- Jurisdicción. En caso de controversia judicial, constituyo domicilio en los indicados en esta solicitud y acepto expresamente la competencia de los Juzgados Ordinarios Nacionales de Primera Instancia en lo Civil y Comercial con asiento en la Ciudad con exclusión de todo otro fuero o jurisdicción.

11/08/2016

Lugar

Fecha

Declaro haber leído y que se me ha informado el contenido de la presente información.

Firma

Firma

Aclaración

Aclaración

DNI

DNI

Domicilio

Domicilio

VEINTE MIL

20000

CONSTANCIA DE ENTREGA

Recibí de conformidad de MAEBA SRL la suma de pesos (\$.....) por la operación Número También manifiesto mi conformidad con la recepción del producto En los términos del artículo 5B del Decreto Reglamentario de la Ley 23.949 del impuesto al valor agregado o el que en el futuro lo reemplace.

Firma

Firma

Aclaración

Aclaración

DNI

DNI

Domicilio

Domicilio

Dr. GUSTAVO R. OBELAR
ABOGADO
M.B. N° 4856 - L° K - P 347

Ret. of.

CONTESTA TRASLADO.-

Sr. Juez Civil en Documentos y Locaciones de la II nom.-

JUICIO: MAEBA S.R.L. VS. PEREYRA HECTOR HUGO S/ COBRO EJECUTIVO.-

EXPTE N° 2371/18.-

GUSTAVO RUBEN OBELAR, por la actora, a V.S. respetuosamente digo:

I.- Que en tiempo y forma vengo por este acto a contestar el traslado de la oposición de excepciones formulada en autos solicitando desde ya que sea desestimada *in limine* por V.S. por resultar dichas defensas manifiestamente improcedentes y dilatorias, todo ello en base a las consideraciones de hecho y de derecho que a continuación se expondrán y con expresa imposición de costas al demandado.-

ANTES DE PROCEDER A CONTESTAR LAS ABSURDAS EXCEPCIONES PLANTEADAS CABE RESALTAR QUE LA CUESTION QUEDA RESUELTA EN EL SIGUIENTE PARRAFO: En el caso que nos ocupa existe el decreto ley 5965/63, el cual no fue derogado, y establece el régimen legal específico aplicable a la legislación cambiaria, normativa que también es de orden público. Así lo establece el art. 1834 del NUEVO C. C. C. N. en cuanto determina la aplicación supletoria del nuevo código cuando las leyes cambiarias no estuvieren vigentes. Es decir, si el decreto ley 5965/63 está aún vigente, mal puede aplicarse la LDC.-

Igualmente, la LDC entra en análisis a los efectos de determinar el cumplimiento de los requisitos del art 36, y mientras estos requisitos estén cumplidos la cuestión sometida a debate queda resuelta: estamos ante un título ejecutivo, abstracto, autónomo, sujeto al Decreto Ley 5965/63 que también es de orden público.-

Y por último, no se encuentra probada la calidad de consumidor del demandado: En el presente caso, el demandado alega ser el “destinatario final” o consumidor, pero dicho carácter no se encuentra probado, es más, como ya fuera manifestado, ni siquiera sabemos si el dinero era para él o para un tercero, o si este posible tercero lo utilizaría para integrarlo en algún proceso productivo, en algún giro comercial, si el contrayente de la obligación le presto el dinero de manera onerosa o gratuita. El demandado solicita que S. S. deduzca que se trata de un consumidor final, que solo por éste motivo se aplique la L.D.C., y que sin más se declare la inhabilidad del título, todo lo cual sería una aberración jurídica.-

II.- CONSIDERACIONES PREVIAS:

JAMAS EXPLICA PORQUE EL TITULO ES INHABIL. EQUIVOCACION DEL TRAMITE Y/O LA VIA ELEGIDA PARA EJERCER SU DEFENSA, NO EXISTE INHABILIDAD DE TITULO POR LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR. LA VIA CORRECTA ES LA PETICION DE LA NULIDAD. INVOCACIÓN GENÉRICA RESPECTO A LA APLICACIÓN DE LA LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR AL CASO PARTICULAR.-

Hechas estas consideraciones cabe la aplicación lisa y llana del art 518 del Digesto Procesal, ya que las excepciones no son claras y concretas, lo que se evidencia de la sola lectura del escrito del demandado. En

ningún lugar de su escrito la demandada específica porque el título base de la ejecución es inhábil, o en que se funda su supuesta excepción. Solo se limita a decir que no cumple con el art 36 de la LDC, cuando, por el contrario, cumple con todos y cada uno de dichos requisitos.-

Por lo que solicito a V.S. determine si estamos en presencia de una oposición de excepción tal como lo establece el Código Procesal, ya que debería expresarse porque es inhábil el título base de la ejecución. Fecho, dictarse sentencia de trance y remate sin más trámite.-

II.- PROLOGO: *Una simple invocación respecto a la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor al caso, no resulta suficiente para evadir la responsabilidad cambiaria que se le imputa en base al pagaré ejecutado. CAMARA CIVIL EN DOCUMENTOS Y LOCACIONES - Sala 1 S/ COBRO EJECUTIVO Nro. Sent: 65 Fecha Sentencia: 11/03/2016 Registro: 00044253-02.-*

Dicho esto, y antes de entrar al tema que nos ocupa cabe expresar, en primer lugar que el demandado en su intento por desvirtuar el legítimo derecho de mi mandante a percibir **lo que él le debe**, simplemente niega en su escrito poseer la deuda contraída con mi poderdante. Efectivamente, el demandado niega la deuda y a la vez niega que el pagare haya sido suscripto en el marco de un contrato o relación jurídica particular. Es decir: NIEGA LA DEUDA Y NIEGA QUE HAYA FIRMADO UN CONTRATO, PERO A LA VEZ MANIFIESTA QUE TIENE UNA RELACION DE CONSUMO CON MI MANDANTE (EVIDENTEMENTE ESTAMOS ANTE UNA "CHICANA" DE LAS PEORES VISTAS). De lo que se deduce que **si no existe para él relación jurídica subyacente, mal puede la misma quedar sujeta a la aplicación de la L.D.C.** En el resto de su escrito solo se limita a copiar y pegar jurisprudencia que, a su criterio, es aplicable al caso, pero que como quedara demostrado en el presente conteste no es así, errando groseramente el demandado en el análisis del caso.-

III.- EXCEPCION DE INCOMPETENCIA: Antes de entrar al tema que nos ocupa cabe expresar que bajo ningún aspecto estamos ante una relación de consumo, ni se advierte que ello pueda derivarse del documento que se ejecuta, dado que se trata de un pagaré en el cual no se indica en ninguna parte del documento cual es la finalidad del crédito otorgado. Mi cliente al momento de prestar el dinero, no indaga sobre que finalidad se dará al mismo, si es para uso personal o para otra persona o incluso para hacerla trabajar en el mercado, simplemente se limita a entregar una suma de dinero con la expectativa que le sea devuelta en tiempo y forma. Véase Jurisprudencia citada en párrafos posteriores: "MAEBA SRL VS. VALENZUELA MARTA DEL VALLE S/ COBRO EJECUTIVO", EXPTE N° 2366/18, SENTENCIA DE FECHA 19/2/2019.-

Comenzando a contestar las excepciones planteadas por el demandado, en primer lugar respecto a la EXCEPCION DE INCOMPETENCIA, partimos de lo expresado por nuestra jurisprudencia, la cual fue clara y contundente al manifestarse al respecto:

"Analizando el problema desde la óptica del título ejecutado y la normativa que lo regula según los cuales los arts.1 inc. 5, 41 y 101 del decreto-ley n°5965/63 establece la competencia del juez del lugar de pago y, en su defecto, el de la creación del título para entender en las acciones derivadas del pagaré. Por su parte, el art.7 inc.4° del CPCC consagra

61

la competencia del juez del lugar en que deba cumplirse la obligación expresa o implícitamente establecido, y en su defecto, a elección de la parte actora, el del domicilio del demandado o el del lugar del contrato. Consecuentemente, el lugar de pago consignado en el título es el que determina la competencia por razón del territorio. Más aún, si el ejecutado consintió el lugar de pago en la Provincia de Tucumán, firmando así en el título, la inserción implica extender la jurisdicción a favor de los jueces del lugar de pago, es decir, la jurisdicción de los jueces del lugar del cumplimiento de la obligación. La jurisprudencia tiene dicho al respecto que: "Desde que existe un lugar determinado para el cumplimiento de la obligación por el deudor principal, debe considerársele extensivo al cumplimiento forzado vía judicial. El juez del lugar del cumplimiento es el único que puede satisfacer al acreedor exactamente en la forma prometida... Si el pagaré consigna expresamente el lugar de pago, allí corresponde la competencia territorial (AP. CNCom., A 25-2-83, ED 104-650; CNCom. Sala D 19/12/80, Bco. Prov. de Córdoba vs. Plásticos Magnano; CCC Sala 1º, 5/12/86 "Gomez Augier vs. Genovese"). El pagaré es un título de crédito autónomo, literal, abstracto y regido por las normas del derecho cambiario, la importancia del lugar de pago es la derivada de que es en referencia a él la determinación de la competencia judicial, el lugar donde ha de exigirse el cumplimiento de la obligación". (Cámara Civil en Documentos y Locaciones, Sala II, sentencia n°322 del 11/09/00. "Soria, Santiago Ángel Roque vs. Nougués Hnos. S.A. S/ Cobro Ejecutivo de Pesos"). DRES.: FAJRE-COURTADE. Registro: 00051145-02. CAMARA CIVIL EN DOCUMENTOS Y LOCACIONES - Sala 1 S/ COBRO EJECUTIVO Nro. Sent: 8 Fecha Sentencia 06/02/2018CHEQUE:EJECUCION. COMPETENCIA TERRITORIAL. JUEZ DEL LUGAR DE PAGO CONSIGNADO EN EL TITULO.-

LA CUESTION QUEDA ZANJADA CON LA SIGUIENTE

JURIS: De manera más clara manifiestan por otro lado los jueces Hugo Llobera y Alejandro Lesser, integrantes de la Sala I de la Cámara Iº de Apelación en lo Civil y Comercial de San Isidro, en autos caratulados "Luna Cooperativa de Crédito Vivienda y Consumo Ltda. C/ Ortega, Oscar Roberto s/ Cobro ejecutivo", consideraron que "el lugar de pago fija la jurisdicción que debe entender en el ejercicio de la acción cambiaria". Así se pronunciaron en una causa donde se discutía la competencia del juez que debía intervenir en un juicio por el pago de un pagaré en el que no se especificó el domicilio para abonarlo. El debate se centró sobre si se debía aplicar la ley de Defensa del Consumidor – postura del demandado– o el Decreto Ley n° 5965/63 y el Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, lo que pretendía la Cooperativa actora. Los camaristas explicaron que en el artículo 36 de ley 24.240 de Defensa del Consumidor establece que en la venta de crédito "será competente para entender en el conocimiento de los litigios relativos a contratos regulados por el presente artículo, siendo nulo cualquier pacto en contrario, el tribunal correspondiente al domicilio del consumidor". Sin embargo, aclararon que por tratarse de un pagaré se está hablando de un título ejecutivo y el decreto ley fija que "el lugar de pago determina la competencia y ante su ausencia se tendrá como tal el lugar de suscripción, siendo éste determinante jurisdicción en la cual se someterá el litigio". El demandado había librado el pagaré en la localidad bonaerense de Martínez pero sin establecer dónde se debía pagar. Luego, se estableció que el domicilio del accionado era en la ciudad de Buenos Aires. "Interpreto que en el caso, no puede dejarse de lado la aplicación de la legislación especial que dispone las reglas pertinentes en cuanto a que el lugar de pago fija la jurisdicción que debe entender en el ejercicio de la acción cambiaria", sostuvieron los jueces. Como se advierte, la legislación especial citada faculta a la actora para iniciar la ejecución en esta

jurisdicción, por lo cual entiendo que el recurso debe prosperar”, concluyeron. Así, los jueces le dieron competencia al juzgado en lo Civil y Comercial N° 10 de San Isidro para intervenir en la causa.”
<https://www.diariojudicial.com/nota/25442>

Es clara la jurisprudencia al respecto, el demandado al momento de adquirir el dinero que solicito a mi poderdante vino a **San Miguel de Tucumán** (la operación no se realizó en Graneros), específicamente a calle Salta N° 173, domicilio donde el demandado recibió el dinero y firmo el pagare que se ejecuta, con total conformidad y sin ninguna salvedad, haciéndole saber que allí en esa dirección debía efectuar los pagos a los que se comprometió a devolver a mi mandante. Como bien dice la jurisprudencia, “el lugar de pago fija la jurisdicción que debe entender en el ejercicio de la acción cambiaria”. Debemos destacar, que el instrumento contiene en forma precisa y clara la indicación del **lugar de creación**, cual es San Miguel de Tucumán.

Oponer esta excepción de incompetencia, claramente es una maniobra dilatoria y evasiva por parte del demandado, de cumplir efectivamente con la obligación que adquirió con mi mandante. Pensar como la parte deudora o más bien como el asesoramiento de su letrado pone en riesgo no solo las instituciones, sino sobre todo el derecho al cobro de mi cliente, o acaso mi cliente tendría que viajar y sentar competencia por todo el país en caso de que tuviera deudores en otras provincias cuando el dinero es otorgado en San Miguel de Tucumán y es totalmente aclarado en el documento que oportunamente es firmado y al momento de contraer su obligación el deudor?????? Con ello se desvirtuaría el derecho al cobro de lo debido y a las obligaciones contraídas entre partes sustentadas en el “principio de la BUENA FE COMERCIAL”.-

Asimismo, el art. 7 del Digesto establece las Reglas Generales de competencia, y en su inc. 4 es muy claro al establecer *“Cuando se ejercitaran acciones personales, el del lugar en que deba cumplirse la obligación, expresa o implícitamente establecido, conforme a los elementos aportados en el juicio, y, en su defecto, a elección del actor, el del domicilio del demandado o el del lugar del contrato, con tal de que el demandado se hallara en él, aunque fuera accidentalmente, en el momento de notificarse la demanda. En caso de ser varios los demandados, con distintos domicilios, el del que elija el actor”*.

Al respecto la jurisprudencia ha manifestado: Desde que existe un lugar determinado para el cumplimiento de la obligación por el deudor principal, debe considerárselo extensivo al cumplimiento forzado vía judicial. El juez del lugar del cumplimiento es el único que puede satisfacer al acreedor exactamente en la forma prometida. En el caso, el privilegio de la demandada a solicitar o ejercer su derecho del fuero federal por razones de vecindad lo ha renunciado o prorrogado al fijar como lugar de pago Tucumán, por tanto, son competentes los Tribunales Ordinarios de esta Provincia, y ello por cuanto debe entenderse que todo pacto refiere siempre al fuero ordinario nunca al federal, SPE CCCRosario, 2-. 31/03/71, J.39-195, citado por Alvarado Velloso - Palacio, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", T. 1, pág. 308. Si el pagaré consigna expresamente el lugar de pago, allí corresponde la competencia territorial (AP. CNCom., A 25-2-83, ED 104-650; CNCom. Sala D 19/12/80, Bco. Prov. de Córdoba vs. Plásticos Magnano; CCC Sala 1°, 5/12/86 "Gomez Augier vs. Genovese"). El pagaré es un título de crédito autónomo, literal, abstracto y regido por las normas del derecho cambiario, la importancia del lugar de pago es la derivada de que es en referencia a él la determinación de la competencia judicial, el lugar donde ha de exigirse el cumplimiento de la obligación. DRES.: MANCA - ALONSO. CAMARA CIVIL EN DOCUMENTOS Y LOCACIONES Sala 2.

Sentencia: 322 Fecha de la Sentencia: 11/09/2000. S/COBRO EJECUTIVO DE PESOS.-

Pues bien, la jurisprudencia citada, especificó en forma contundente el criterio a seguir en casos como el de autos, y al respecto es muy clara.-

Asimismo, La importancia del lugar de pago deriva de que es en referencia a él la determinación de la competencia jurisdiccional, el lugar donde ha de exigirse el cumplimiento de la obligación. Si bien se trata de un requisito formal del pagaré, su falta es suplida por ella misma, art. 102 última parte. En consecuencia, no mediando indicación especial acerca del lugar donde se realizará el pago, el lugar de creación del documento es el lugar de pago y por ende también a él corresponde la competencia jurisdiccional. Para la determinación de la misma, carece de relevancia la existencia de un domicilio inserto en el margen izquierdo y al pie del pagaré, pues a los fines cambiarios dicha constancia solo tendría los efectos pretendidos si se encontrase a continuación del impreso "pagadero en" (Cam. Nac. Sala A, Diciembre 23/96, "Bco. Sudameris c/Metalúrgica CMA S.A.", La Ley 1997-c, 997, 769). DRES.: MANCA.- ALONSO. CAMARA CIVIL EN DOCUMENTOS Y LOCACIONES Sala 2 Sentencia: 183 Fecha de la Sentencia: 22/05/2000 S/COBRO EJECUTIVO DE DOLARES.-

Para finalizar, La conclusión expuesta – incompetencia del fuero en lo Civil y Comercial Común, en la presente acción de consumo - no cambia por la invocación a las normativas de la ley 24.240 y sus reformas, que protegen los derechos del consumidor. La citada ley no desplaza los principios de competencia en razón de la materia que de modo improrrogable establece **ESPECIFICAMENTE** el ordenamiento legal provincial. Debiendo destacarse que la citada ley Nacional al legislar las acciones judiciales en su capítulo XIII se limita a establecer que deben deducirse ante Juez Competente, sin mencionar regla alguna al respecto, materia de competencia de las Provincias dentro de sus respectivas jurisdicciones.- DRES.: IBÁÑEZ - ACOSTA. CAMARA CIVIL Y COMERCIAL COMUN Sala 3 Sentencia: 411 Fecha de la Sentencia: 10/10/2013 S/ESPECIALES (RESIDUAL).-

Los fallos citados no dejan margen a dudas y el criterio expuesto resulta contundente. De estos actuados se desprende con meridiana claridad que la *competencia del Juzgado Civil en Documentos y Locaciones de la Ciudad de San Miguel de Tucumán* es la que prevalece para entender en el presente caso.-

En base a lo expuesto, resulta evidente que el planteo efectuado por mi parte resulta absolutamente procedente y ajustado a derecho, no hay laguna jurídica al respecto, la ley provincial es específica en el tema, por lo cual la excepción planteada por el demandado de incompetencia no resulta procedente y V.S. debe rechazarlo de oficio.-

Reitero lo dicho al inicio de este conteste, el Dcto Ley 5965/63 se encuentra plenamente en vigencia: En el caso que nos ocupa existe el decreto ley 5965/63, el cual no fue derogado, y establece el régimen legal específico aplicable a la legislación cambiaria, normativa que también –como ya expuse- es de orden público. Así lo establece el art. 1834 del C. C. en cuanto determina la aplicación supletoria del nuevo código cuando las leyes cambiarias

no estuvieren vigentes. Es decir, si el decreto ley 5965/63 está aún vigente, mal puede aplicarse la LDC.-

IV.- A LA CONFUSA INHABILIDAD DE TITULO:

A).- SI BIEN ESTOY PLENAMENTE SEGURO QUE NO ESTAMOS FRENTE A UNA EXCEPCION DE LAS ESTABLECIDAS EN LA LEY PROCESAL, POR IMPERATIVO LEGAL, PROCEDERE A CONTESTAR. Cabe destacar aquí que esta excepción debió ser rechazada in limine por S.S. Como primera medida el demandado, o su letrado patrocinante deberían saber que No basta la mera negación formal y genérica de la existencia de la deuda.-

Dice la Jurisprudencia: “...además de la simple mención de inexistencia de deuda se debe expresar las circunstancias de hecho que coadyuven a crear una certeza en el magistrado en este sentido”....(sentencia N° 417 fecha 26/05/2000 Coop consumidor de Crédito Vivienda y Consumo Ltda. vs Kochuk arturo s/Cobro de pesos”).-

“La negativa de la deuda como requisito de admisibilidad de la excepción reviste tal importancia, que en algunos casos, con criterio que compartimos, se exige que esa negativa no se invoque como un mero formalismo, sino que “debe estar seguida de la enunciación precisa y categórica de las circunstancias de hecho que la motivan, de modo que generen en el juez la necesaria certeza de que existen hechos objetivamente ponderables que justifican el desconocimiento como recaudo habilitante de dicha excepción” (Cam Nac Civil Sala A 16/9/96 LL 1 997. C-484) Sentencia N° 278, Fecha 18/8/01 Castillo S.A. vs Noguera Ruben Enrique s/Cobro Ejecutivo”

En conclusión, no basta con una mera negativa de la deuda en forma general, sino que el demandado debe demostrar expresamente el interés jurídico que persigue con la declaración de inhabilidad de título. Claro está que no lo hizo porque, la deuda existe y solo la negó para cumplir con un ritualismo formal.-

Nos encontramos sin dudas frente a una defensa carente de sustento legal y meramente dilatoria, la cual no puede siquiera ser considerada por V.S., debiéndosela rechazar in – limine con expresa condenación en costas al demandado.-

B).- En segundo lugar, cabe expresar que el demandado en su intento por desvirtuar el legítimo derecho de mi mandante a percibir lo que le debe, no advirtió, o no quiso advertir, que el título base de la presente acción reúne todos los requisitos exigidos por la ley cambiara que a la fecha se encuentran en plena vigencia (DEC/LEY 5965/63), pues así lo establece el art. 1834 del Nuevo Código C. C. C., dicho art. establece la aplicación supletoria del C.C. en cuanto a leyes cambiarias se refiere en la medida que estas últimas no estén vigentes, PERO EL DCTO LEY 5965/63 ESTA EN PLENA VIGENCIA; más allá de cumplir ampliamente con lo exigido por la ley 24.240 de Defensa del Consumidor, para llevar adelante la presente ejecución.-

C).- INEXISTENCIA DE LA EXCEPCION DE INHABILIDAD DE TITULO POR LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR LEY 24.240.-

El Código Procesal en lo Civil y Comercial de Tucumán en su artículo 571 reza que las “únicas excepciones admisibles” son las que se

establecen a lo largo de sus 11 incisos, siendo esta enunciación de carácter taxativo y no solo meramente enunciativo. Por lo tanto V.S. estamos antes una excepción que no existe como tal, por lo cual la vía elegida es errónea, por no existir, ya que el artículo 36 de la ley 24.240 establece como sanción, por su incumplimiento, la nulidad del contrato o de alguna de sus cláusulas y no la inhabilidad de título, es más si pretende el demandado insistir con esta excepción, no cumple con un requisito esencial para oponer la misma, tal como lo exprese en el acápite anterior.-

Dice la Jurisprudencia: *“Como es sabido, la excepción de inhabilidad de título está circumscripta a las formas extrínsecas del título, y no cabe admitirla en torno a la legitimidad de la causa, toda vez que su demostración supone una investigación de hecho y de prueba ajena a las características del título que se ejecuta y las peculiaridades de la especial vía en la que se tramita. Se excedería, de ese modo, el limitado ámbito cognoscitivo de ese tipo de proceso, desnaturalizándose su carácter sumario. De allí que toda reclamación al respecto deberá ventilarse en el proceso ordinario posterior con la amplitud de debate y prueba que lo caracteriza (CSJTuc., sentencia N° 621 del 30/8/2004). En el juicio ejecutivo el deudor no puede fundar la excepción de inhabilidad de título en circunstancias que se vinculan con la celebración del contrato de mutuo, cuando de éstas no surgen manifiestas del título que se esgrime como base de la ejecución. Estas cuestiones constituyen aspectos que hacen a la causa de la obligación y no a la perfección del instrumento en su exterioridad, único aspecto que puede ser objeto de examen a través de la excepción articulada, conforme lo dispone el art. 534 inc. 4° procesal (CSJTuc., sentencia N° 621 del 30/8/2004). DRES.: DATO – BRITO – AREA MAIDANA.” CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala Civil y Penal S/ COBRO EJECUTIVO DE PESOS. Nro. Sent: 758. Fecha Sentencia 13/08/2007.-*

Lo que debió haber hecho el demandado es plantear la nulidad de la ejecución basándose en el incumplimiento – de existir, y aquí no es el caso – de los requisitos establecidos en el art. 36 de ley 24.240 tal como lo establece la segunda parte del referido artículo.

D).- Los títulos de crédito constituyen un elemento sustancial, desde el punto de vista económico, a los fines de **resguardar la confianza** en el tráfico comercial en que las deudas serán satisfechas. En base a esto, mi mandante emite un pagare, el cual es firmado en forma voluntaria por el demandado y se compromete a devolver antes de una fecha indicada, resguardando el derecho de iniciar las acciones judiciales con posterioridad en caso de su incumplimiento, de lo contrario, que seguridad tendría el acreedor de que la otra parte cumpliría correctamente con su obligación???.-

Así, el **título de crédito** es un documento necesario para ejercitar el derecho literal y autónomo expresado en el mismo, el cual contiene una declaración unilateral; el título es por lo tanto un documento sobre un *“derecho privado”* dado entre las partes, cuyo ejercicio está condicionado jurídicamente a la posición del documento. Aquí hay un título de crédito bajo el cual una persona se ha obligado a **cumplir una obligación de forma unilateral y absolutamente voluntaria**, por consiguiente no es posible aplicar la ley de defensa del consumidor.-

Si bien esta parte no desconoce que la normativa contenida en el nuevo CCC y N relativa a la defensa del consumidor es de orden público, tampoco puede por ello pretender violentarse la normativa del derecho cambiario (que de igual modo reviste el carácter de orden público) y

del resto del ordenamiento procesal, la cual no ha sido derogada en absoluto y por lo tanto se encuentra vigente. La sola invocación del derecho del consumidor haría suponer que se trataría de un nuevo derecho de raigambre superior al de todas las instituciones jurídicas del derecho privado. En tal orden de ideas y con la finalidad de preservar la integridad del ordenamiento jurídico y la igualdad de las partes en el proceso, entiendo que el derecho de crédito debe tener idéntica tutela. Asimismo, La ley de defensa del consumidor no puede considerarse en forma genérica de orden público cuando existen otras leyes de aplicación al caso que tienen el mismo carácter y son **específicas en la materia.** En el caso que nos ocupa existe el decreto ley 5965/63, el cual no fue derogado, y establece el régimen legal específico aplicable a la legislación cambiaria, normativa que también –como ya expuse- es de orden público. Así lo establece el art. 1834 del C. C. en cuanto determina la aplicación supletoria del nuevo código cuando las leyes cambiarias no estuvieren vigentes. Es decir, si el decreto ley 5965/63 está aún vigente, mal puede aplicarse la LDC.-

Por su parte la jurisprudencia manifestó “...la ley 24.240, modificada por la ley 26.631 sea de orden público, no implica que todo su articulado lo sea. No obstante el carácter de orden público de las normas que la reglan, la misma condición tienen los preceptos tendientes a lograr la pronta terminación de los procesos, en tanto no se opongan a ello principios fundamentales que pudieran impedirlo” (v. Fallos: 307:569; 311:621 y sentencia del 30 de junio de 1999, in re, comp. 77, L XXXV, “Rezk, Sergio Rubén c/ M.E.O.S.P. s/ proceso de conocimiento”, publicado en Fallos: 324:2493).

Vera S.S., que la jurisprudencia en que nos respaldamos es contundente, y no podemos apartarnos ni prescindir de la normativa específica en el tema, para tratar de encuadrar el caso en una relación de consumo, que no lo es; y como bien se dijo, es de orden público y que regula en lo específico preceptos atinentes a la letra de cambio y pagaré. Sostener lo contrario importaría conculcar el debido proceso y violentar la seguridad jurídica procesal. También, el artículo 1834 del CCCN por su lado, establece que las normas del código civil se aplican en subsidio de las especiales que rigen para los títulos valores. La presentación de la accionada, presumiendo una subyacente relación de consumo y declarando la aplicación en autos de la Ley 24.240 con fundamento en que se vulnera la posición del consumidor, implica –más allá de lo expuesto en los párrafos precedentes-, un quebrantamiento del principio de retroactividad imperante en nuestro ordenamiento jurídico, y una violación clara de normas de raigambre constitucional (debido proceso, propiedad, igualdad ante la ley, entre otros).

E).- EL DEMANDADO NO PRUEBA SU CALIDAD DE CONSUMIDOR: La relación jurídica que vincula a las partes no tiene sustento en la Ley 24.240 incorporada al Código Civil, dado que de los propios hechos introducidos en la demanda, no surge de manera manifiesta una relación de consumo.-

Este primer entendimiento de la normativa es totalmente equívoco. Analizándolo detenidamente se puede ver que por numerosas causales no es aplicable al caso en cuestión:

Como bien enmarca el primer artículo de la LDC la misma es aplicable al “consumidor o usuario, entendiéndose por tal a toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final”.

64

El caso de autos claramente está exento de responder a los preceptos de la ley de Defensa del Consumidor, debido a que no estamos ante una relación de consumo, ni se advierte que ello pueda derivarse del documento que se ejecuta, dado que se trata de un pagaré en el cual no se indica en ninguna parte del documento cual es la finalidad del crédito otorgado. Mi cliente al momento de prestar el dinero, no indaga sobre que finalidad se dará al mismo, si es para uso personal o para otra persona o incluso para hacerla trabajar en el mercado, simplemente se limita a entregar una suma de dinero con la expectativa que le sea devuelta en tiempo y forma.-

En este sentido se expreso el Juzgado Civil en Doc y Loc de la VIII Nom, en los autos de mi mandante caratulados "MAEBA SRL VS. VALENZUELA MARTA DEL VALLE S/ COBRO EJECUTIVO", EXPTE N° 2366/18, SENTENCIA DE FECHA 19/2/2019: *"De la compulsa de autos, en especial los términos en que se trabó la litis surge que la demandada estaba obligada a ser suficientemente explícita al momento de oponer la defensa bajo examen además de no estar exenta de responsabilidad probatoria debido a la posición adoptada por cada una de las partes en el proceso... La parte accionada ha basado prácticamente toda su defensa partiendo de considerar que la relación que une a las partes del proceso es una relación de consumo y que consecuentemente se encuentra sometida al régimen tuitivo de la Ley 24.240... A partir de lo dicho hasta acá, corresponde determinar en el caso de autos, si las partes involucradas (librador y beneficiario) revisten la calidad de proveedor y consumidor (art.1 y 2 LDC) y, en su caso, si se trata de una operación de crédito para el consumo... El hecho de ser la demandada una persona física no autoriza a presumir el carácter de consumidora, pues tal como lo establece la ley tanto las personas físicas como las jurídicas pueden ser consumidores. A la luz de las consideraciones vertidas ut supra, entiende la Proveyente que de los elementos que surgen de la causa no puede inferirse una relación de consumo, como así tampoco que los pagarés fueron librados como garantía del pago de un crédito para el consumo... Es decir que no existe prueba alguna aportada por la demandada que acredite sin duda alguna que solicitó un préstamo para cancelar las deudas referidas... Es por ello que para solicitar la tutela jurisdiccional sobre la base de la Ley de Defensa del Consumidor debe argumentarse y probarse que las circunstancias fácticas caen dentro de la órbita de su aplicación, ya que la mera invocación de las respectivas normas resulta insuficiente a tal fin, lo que no ocurrió en autos... RESUELVE: 1) NO HACER LUGAR a las excepciones de Inhabilidad de título".- FDO DRA MARIA SUSANA LEMIR SARAVIA.-*

EN IGUAL SENTIDO SE EXPRESARON LOS DRES DRES.: SANTANA ALVARADO - AGUILAR DE LARRY. CAMARA CIVIL EN DOC. Y LOCACIONES Y FAMILIA Y SUCES. - CONCE - Sala en lo Civil en Documentos y Locaciones S/ COBRO EJECUTIVO Nro. Sent: 9 Fecha Sentencia 08/03/2018.-

Al respecto, la doctrina es clara y manifestó: *"El consumidor, tanto en el art. 2° como en el 4° de la Ley N° 17.250, es la persona "que adquiere o utiliza productos o servicios como destinatario final en una relación de consumo o en función de ella".*

La calidad de "destinatario final" se describe negativamente en el inc. 2° del art. 2°: no lo es quien "adquiere, almacena, utiliza o consume productos o servicios con el fin de integrarlos en procesos de producción, transformación o comercialización".

La doble caracterización del "consumidor", positiva y negativa, contenida en los dos incisos del art. 2º, suscita indudablemente dificultades interpretativas. Sin embargo, parece claro que la enunciación de conductas y de su finalidad contenida en el inc. 2º sólo adquiere sentido si se la interpreta como la definición negativa de la calidad de "destinatario final"; de lo contrario, toda la frase sería superflua, porque si conforme al inc. 1º es requisito del concepto de "consumidor" ser "destinatario final", resulta necesariamente que quien no se constituye en tal no será "consumidor" cualquiera sea su conducta y la finalidad con que la cumpla. Más aun, todo el inc. 2º sería superfluo, porque luego de la afirmación contenida en el inc. 1º, es innecesario agregar que no es "consumidor" quien no se constituye en "destinatario final". El inc. 2º sólo puede interpretarse como la enunciación legal de las circunstancias en las cuales quien "adquiere, almacena, utiliza o consume productos o servicios" no se constituye en "destinatario final" de los mismos y por ende no es "consumidor". Por otra parte, los "procesos de producción, transformación o comercialización" serán las vías por las que se producirá normalmente la transferencia a terceros de los bienes o servicios por quien no los adquiere o utiliza como "destinatario final" (Sólo quedaría fuera de tal enumeración la transferencia a terceros a título gratuito, cuya calificación legal se analizará más adelante).

El factor determinante es el fin con que las conductas del inc. 2º se cumplen: si consiste en integrar los productos o servicios en "procesos de producción, transformación o comercialización", el sujeto no será consumidor.

El fin como intención, propósito, objetivo o designio, como representación psicológica o subjetiva de un efecto o resultado final procurado con la conducta, adquiere relevancia para la categorización como consumidor. De esta manera los motivos, el "por qué" y "para qué" el sujeto privado actúa, en principio irrelevantes en la contratación privada para el perfeccionamiento y validez de los contratos, adquieren relevancia en la regulación de las relaciones de consumo para conferir o negar la calidad de consumidor al contratante.

En el presente caso, el demandado alega ser el "destinatario final" o consumidor, pero dicho carácter no se encuentra probado, es más, como ya fuera manifestado, ni siquiera sabemos si el dinero era para él o para un tercero, o si este posible tercero lo utilizaría para integrarlo en algún proceso productivo, en algún giro comercial, si el contrayente de la obligación le presto el dinero de manera onerosa o gratuita. El demandado solicita que S. S. deduzca que se trata de un consumidor final, que solo por éste motivo se aplique la L.D.C., y que sin más se declare la inhabilidad del título, todo lo cual sería una aberración jurídica.

Aceptar esta excepción implicaría permitir que cualquier persona, en un total repudio de la Buena Fe comercial, empiece a pedir préstamos de dinero, reconozca deber el dinero, reconozca su firma, pero por un excesivo rigorismo formal de la ley 24240 solicite se declare la nulidad el título cambiario. Entonces: ¿Dónde quedaría la buena fe? ¿Qué pasaría con la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad, las buenas costumbres? ¿Por una supuesta condición preponderante del otorgante del préstamo vamos a ir en detrimento de éste avalando una conducta sin lugar a dudas fraudulenta por parte del deudor? ¿Para qué van a pagar si saben que luego al querer exigir el cumplimiento de su obligación van a contar con el aval de la justicia para dejar de asumir su compromiso? ¿Qué la ley de defensa del consumidor va a ser excusa para éste tipo de accionar?. Para ser claros, le viene bien solicitar se aplique la ley de defensa del consumidor para no pagar y lo aprovecha, si la jugada le sale bien, mejor para el, total el dinero oportunamente otorgado por mi

cliente ya lo retiró, ya lo usó, lo aprovechó, lo disfrutó de la forma que quiso y consideró apropiada. Si en el camino mi cliente pierde el dinero no importa, es su problema. Con una postura así como se podrá seguir en el mercado. En donde quedaría el derecho cambiario y las instituciones si en el camino perdemos la lealtad comercial y la buena fe.-

En derecho existe un principio fundamental que rige los procesos: el que alega debe probar, el demandado alega ser el destinatario final del dinero otorgado, pero no lo prueba, él considera que el solo hecho de ser un empleado asalariado es prueba suficiente, cuando ni siquiera sabemos, como ya fuera dicho, si el dinero era para Él.-

No existe relación aquí de consumo, por ende no existe posibilidad de aplicar la Ley de Defensa del Consumidor. El pagaré que origina la obligación reclamada en autos se rige por un conjunto de normas autónomas y específicas con principios totalmente distintos y ajenos a los de una relación de consumo. Entender al título crediticio – pagaré- como una relación entre consumidor y prestador de servicios es totalmente desacertada, dejando a la deriva los numerosos tratados y obras que se han escrito sobre los títulos de crédito.-

De tal forma se pretende apartar las normas del Código Procesal y cambiarias que como tales tienen prelación por ser específicas en la materia, y regulan no solo la actividad de las partes en el proceso, sino también la del propio órgano de justicia, conculcando principios procesales como el de igualdad de las partes en el proceso (arts. 16 y 18 de la Constitución Nacional, 34 inc.4* e inc. 5* "e", 36 inc. 1* y 155 del código procesal).

Respecto del Principio constitucional de **Igualdad de las partes en el proceso**, se desprende que se ha elaborado un esquema que menoscaba en forma palmaria y manifiesta el derecho de mi mandante a recuperar la suma de dinero adeudada, que de buena fe, otorgo al demandado con la certeza de que el demandado cumpliría.-

Quien suscribe un documento en las condiciones concebidas, ha elegido un medio de antemano conocido y libremente elegido. Habiendo contraído una deuda en forma absolutamente voluntaria, ha suscripto un título de crédito debidamente confeccionado e identificado como tal y no lo ha abonado. Máxime, tratándose de un deudor que es cliente de mi mandante desde fecha 17/03/2016. Mal podría ahora decir que desconocía las condiciones de contratación y lugar de pago de la obligación.-

Más aún cuando del artículo 101 del Decreto Ley 5965/63 que establece taxativamente los requisitos que debe reunir un pagaré, se desprende que el título que se ejecuta es formalmente hábil ya que los mismos se encuentran cumplidos conforme a derecho.-

Por todo lo expuesto, manifiesto que resulta improcedente la presunta consideración en cuanto a la relación de consumo atribuida. Y más aún pretender aplicar al presente caso la normativa establecida por la Ley de Defensa del Consumidor.

Por otro lado, una de las características esenciales en este tipo de juicios ejecutivos es que **no se discute su causa**, hacerlo implicaría desvirtuar la efectividad de la vía ejecutiva, puesto que bastaría inculpar a todo tenedor de documentos de mala fe o culpa grave en la adquisición, para entonces discutir la causa de la obligación, y de este modo, ordinarizar la vía ejecutiva con

la consabida dilación en el trámite de recupero de créditos. Además el análisis causal del título implicaría ir en contra del principio de economía procesal. Asimismo, la jurisprudencia nos dice: **PAGARE: EJECUCION. EXCEPCION DE INHABILIDAD DE TITULO. CUESTIONAMIENTO NO RELACIONADO CON LAS FORMALIDADES DEL TITULO SINO CON LA CAUSA DE LA OBLIGACION. IMPROCEDENCIA:** *...con respecto a la excepción de inhabilidad de título fundada en que los pagarés carecen de fuerza ejecutiva por resultar la causa que dió origen un contrato civil, podemos decir que el art. 517 inc. 4 del CPCyC establece que la excepción de Inhabilidad de título "... se limitará a las formas extrínsecas del mismo, sin que pueda discutirse la legitimidad de la causa..." Por tanto en materia ejecutiva la excepción de falsedad e inhabilidad está limitada a la falsedad material del título, pero no la falsedad ideológica e intelectual, ni a la causa de la obligación o acto jurídico que le dio origen, quedando fuera de su ámbito cognoscitivo la existencia, ilegitimidad o falsedad de la causa obligacional.- La defensa de inhabilidad de título se refiere a deficiencias capaces de suprimir la fuerza ejecutiva, debiendo versar sobre formalidades esenciales que hacen a la naturaleza misma del título ejecutivo y a la procedencia de la acción cambiaria, por lo que resulta improcedente si las razones opuestas no afectan el título mismo, sino a sus antecedentes. A los efectos del proceso ejecutivo, el título se encuentra desvinculado de la relación jurídica que pudo haberle dado nacimiento. Así en el caso concreto, más allá de cuáles fueron las razones que llevaron a la ahora demandada a librar un pagaré a favor de la actora y siendo que el instrumento base de la ejecución reúne los extremos exigidos por la ley cambiaria (Dcto.Ley 5965/63), el mismo es hábil para su ejecución, quedando excluida del conocimiento judicial la causa de la obligación porque excede el límite de la defensa en juicio ejecutivo (arg.art.517 inc.4º del C.P.C.y C.). La excepción de inhabilidad de título solo resulta viable cuando se cuestiona la idoneidad jurídica del título, sea porque no figura entre los mencionados por la ley, porque no reúne los requisitos a que ésta condiciona su fuerza ejecutiva (obligación dineraria líquida y exigible no sometida a condición o prestación), o porque el ejecutante o el ejecutado carecen de legitimación sustancial (legitimación para obrar) en razón de no ser las personas que figuran en el título como acreedor o deudor. (conf. Falcón, Procesos de ejecución, T. IA, pag. 332) Tampoco la inclusión en el pagaré de referencias al negocio causal no perjudica en modo alguno la acción cambiaria ejecutiva, en tanto el instrumento cartular no pierde por ello su carácter abstracto y consecuentemente la acción cambiaria que es propia de dichos títulos (C. 2º Civ. y Com. Paraná, sala 2º, 11-3-2004, Banco de Entre Ríos vs. Schmidt, Omar F. y otro). DRES.: MANCA -ALONSO. Registro: 00047892-01.-*

F).- ART 36 DE LA LEY 24.240. CUMPLIMIENTO POR PARTE DE MI MANDANTE.-

Ahora bien, analizaremos los documentos que se cuestionan para probar que todos los requisitos exigidos por el mencionado artículo se encuentran cumplidos. El art. 36 consta de ocho puntos a cumplir, que en los documentos se encuentran enunciados de la letra a) a h) en consonancia con la ley. Para una mayor claridad en la exposición se transcribirá primero la letra de la ley y luego lo enunciado por los pagare en cuestión.-

Inc. a) "La descripción del bien o servicio objeto de la compra o contratación, para los casos de adquisición de bienes o servicios" / a) el negocio causal del presente pagaré es un contrato de mutuo; "b) El precio al contado, sólo para los casos de operaciones de crédito para adquisición de bienes o servicio"/ b) que se celebró por \$... con fecha ...; "c) El importe a desembolsar

inicialmente —de existir— y el monto financiado” / c) el monto financiado es de \$...; “d) La tasa de interés efectiva anual” / d) la TEA es de : ...%; “e) El total de los intereses a pagar o el costo financiero total” / e) el total de intereses a pagar es de \$...; “f) El sistema de amortización del capital y cancelación de los intereses” / f) el sistema de amortización del capital y cancelación de interés es de capital constante; “g) La cantidad, periodicidad y monto de los pagos a realizar” / g) el capital es pagadero en ... cuotas iguales, mensuales y consecutivas de \$... venciendo la primera de ella el El resto de las cuotas, en la misma fecha de los meses subsiguientes. El vencimiento de la última cuota es el día ...; “h) Los gastos extras, seguros o adicionales, si los hubiere” / h) los gastos son los siguientes administrativos ...% por cuota.-

Como V.S. puede comprobar cada requisito del art. 36 de ley 24.240 se encuentra cumplido por mi mandante.-

Por todo lo expuesto queda demostrado que los documentos cumplen con todos los requisitos estipulados en el art. 36 de la ley 24.240 y por lo tanto no se puede declarar la nulidad de los mismos, por lo cual no debe V.S. dejar de lado la abstracción cambiaria, debido a que la jurisprudencia es coincidente en que la misma puede ser dejada de lado cuando se infringe con la mencionada ley, **NO así cuando la misma se cumple, como en el caso bajo análisis.-**

Analizando la jurisprudencia citada en el escrito de excepción del demandado: *“El pagaré que se acompaña, en lugar de utilizarse como instrumento circulatorio, abstracto, literal, y autónomo, constituye la garantía de una operación de crédito para consumo, iniciándose la ejecución del mismo en violación de los derechos de los consumidores y usuarios (arts. 101, 102, 103 y ccdtes. del Dec. Ley 5965/1963; conf. Osvaldo Gómez Leo, “El pagaré”, Ed. Depalma, Cdad. de Bs. As., 1988, págs. 20/21). De este modo, el documento traído en autos, aunque se trate de un título formalmente válido, al ser utilizado como garantía de una deuda contractual cuyos recaudos no aparecen cumplidos en el texto de la propia cambial, resulta inhábil para intentar un cobro ejecutivo. Tales requisitos -que deben cumplirse en el pagaré bajo pena de nulidad- son: a) La descripción del bien o servicio objeto de la compra o contratación, para los casos de adquisición de bienes o servicios; b) El precio al contado, sólo para los casos de adquisición de bienes o servicios; c) El importe a desembolsar inicialmente -de existir- y el monto financiado; d) La tasa de interés efectiva anual; e) El total de intereses a pagar o el costo financiero total; f) El sistema de amortización del capital y cancelación de los intereses; g) La cantidad, periodicidad y monto de los pagos a realizar; h) Los gastos extras, seguros o adicionales, si los hubiere (conf. art. 36 de la Ley de Defensa del Consumidor). Téngase en cuenta que la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor se impone pues, como enseña destacada doctrina el derecho de los consumidores es un microsistema legal de protección que gira dentro del sistema de derecho privado, con base en el derecho constitucional y, por lo tanto, las soluciones deben buscarse dentro del propio sistema, ya que lo propio de un microsistema es su carácter autónomo y aún derogatorio de las normas generales (arts. 42 de la Constitución Nacional y 38 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires argto. doct. Ricardo Luis Lorenzetti, “Consumidores”, 2da. edición, Ed. Rubinzal - Culzoni, Santa Fe, 2009, pág. 50). De este modo y aunque el pagaré se encuentra expresamente incluido en el elenco de los títulos ejecutivos (art.485 inc. 5° del CPCC) cumpliendo formalmente con los requisitos establecidos por el Decreto Ley 5965/1963, entendemos que no es posible utilizarlo para promover una ejecución si el contrato que le sirvió de causa requiere de ciertos requisitos que no aparecen cumplidos. DRES.: MANCA - ALONSO. CAMARA CIVIL EN DOCUMENTOS Y*

LOCACIONES – Sala 2 S/ COBRO EJECUTIVO. Nro. Sent. 392 Fecha Sentencia 18/10/2016”.-

Si prestamos atención al contenido de la jurisprudencia, es clara al respecto indicando que el pagare para ser válido como tal, no solo debe cumplir con el Dec. Ley 5965/63, sino también con el art. 36 de la ley 24.240, y **estos requisitos deben estar incluidos en el texto de la propia cambial. En el caso analizado en autos, los documentos ejecutados cumplen con ambos requisitos**, como se analizó anteriormente, por lo cual, son hábiles para la ejecución.-

Decir más sería redundar. Por todo lo expuesto estoy segura que la defensa opuesta por el demandado no puede si quiera ser considerada por V.S., debiéndosela rechazar in – limine con expresa condenación en costas.-

G).- GASTOS ADMINISTRATIVOS: Ahora cabe referirse al cálculo de los gastos que cuestiona el demandado, **que bajo ningún punto de vista deberíamos entrar al análisis de los mismos atento el principio de abstracción cambiaria que rige en la materia.** Según lo manifestado por la demandada con respecto al porcentaje de 94.75% por cuota, va de suyo que estamos ante un error de tipeo, y que bajo ningún punto de vista se le está cobrando dicho valor a la demandada, de lo contrario el pagare no sería de \$ 16.800.- sino de muchísimo más. Pero la buena fe comercial de mi mandante es innegable y ejecuta el pagare conforme a derecho comercial vigente. Y tal como lo dije anteriormente, **a pesar de que por la abstracción cambiaria que caracteriza a dichos documentos no deberíamos estar realizando un análisis de los mismos**, voy a aclarar el punto y demostrar en donde yerra la deudora, solo a los fines de ser lo más claro posible.-

Surge palmariamente del mutuo adjuntado a la presente que el gasto administrativo es el 1.39% por cuota, y dicho documento no deja lugar a dudas. Es más, el Letrado patrocinante de la demandadas al leer el Pagare cuestionado y realizar las sumas correspondientes observó seguramente que se trató de un error de tipeo, ya que si V.S. observa el documento verá que por dicho de error de tipeo se invirtieron los puntos d) y h), colocándose como gastos administrativo lo correspondiente al TEA, pero el Letrado de la contraria intenta confundir a V.S. –lo que no lograra- con su absurdo planteamiento.-

A mero título ejemplificativo pasare a realizar el cálculo del pagaré en cuestión, el de fecha 12 de Mayo del año 2016, aclarando que los gastos administrativos representan **un porcentaje del total del préstamo**, que se calcula en base a la cantidad o número de cuotas en que dicho préstamo se financie. **En el caso particular, el gasto administrativo representa el 1,39% por cuota y no el 94,75% que erróneamente se consignó. Dicho error es totalmente dispensable ya que en la ejecución aquí promovida NO SE COBRO NI SE INTENTA COBRAR ESE GASTO MAL TIPEADO. Entonces: 1,39% x 8 cuotas (11,12%), ahí tendríamos el porcentaje total sobre los \$10.000 (valor por el que fue celebrado el préstamo). Por lo cual el cálculo de los gastos administrativos sería: 1,39 x 8 = 11,12% y de allí: \$10.000 x 11,12 % = \$ 1.112.-**

Por lo manifestado si sumamos todos los rubros del pagare \$10.000 + \$5690 (intereses, no cuestionados por el demandado) + \$1.112.- (gastos administrativos) = \$16.802. El pagare en cuestión fue subscripto por la suma de \$16.800.-, con el redondeo a favor del demandado.-

Como podemos ver, el cálculo es correcto, solo que la demandada pretende introducir una cuestión que no fue planteada por mi mandante ni siquiera tentada en su cobro. En el derecho comercial actual no solo es inaceptable tomar un gasto administrativo del 94.75% (véase el otro pagare que tiene un gasto del 1,23%) como un porcentaje del valor de la cuota sino que

67

también inaceptable que un capital de \$10.000 genere \$ 1112 de gastos administrativos si supuestamente es del 94.75% por cuota. Extenderme en este párrafo es harina de otro costal, y lo dejo pendiente para alguna otra ocasión en la que pueda explayarme sobre el concepto "valor del dinero".-

H).- SUPUESTO INCUMPLIMIENTO DE RECAUDOS.-

Afirmo sin dubitaciones que el lugar de pago es un REQUISITO NATURAL DEL PAGARE: Otro punto por el cual el demandado sostiene que los títulos son inhábiles es porque según a su entender los mismos se encuentran "adulterados" por haberse agregado a mano la leyenda "en calle Salta 173". Sobre este aspecto es absurdo lo que pretende. Antes que nada, sin intenciones de ofender a la contraparte (FALTA DE CONOCIMIENTO DE LAS LEYES CAMBIARIAS) cabe hacer un repaso de lo que establece la ley respecto a los requisitos del pagare. En el Dec/Ley 5965/63 y en consonancia con el Art. 1833 del CCyCN, se establecen requisitos dispositivos y naturales de las letras de cambio y pagare, siendo los primeros esenciales para la existencia de los mismo, y por los tanto para determinar su habilidad como títulos ejecutivos, estos son la denominación pagare, la promesa de pago, lugar y fecha de creación y la firma del obligado cambiario; por otro lado, se encuentran los requisitos naturales que no hacen a la esencia de los documentos y que pueden ser llenados con posteridad o no, a la presentación del mismo, estos son el vencimiento y lugar de pago, que es el caso que nos concierne. Por lo manifestado cabe aclarar que los documentos no se encuentran adulterados por haberse agregado la dirección donde se debían efectuar los pagos, no se tacha ni se enmienda absolutamente nada del pagare que se encuentra pre impreso, se realiza un simple agregado que no que no invalida los documentos como títulos ejecutivos.

Asimismo parece que el demandado desconoce que el pagare en blanco o incompleto es legal en nuestro ordenamiento jurídico, pudiendo incluso circular, siempre que tenga la firma y denominación al momento de ser creados y que dicho documento puede ser llenado incluso al momento de ser presentado para su pago. El deudor al firmar así tácitamente consiente en que el tenedor lo complete. Es parte de la naturaleza de la letra de cambio. Es una característica normal y habitual de la misma; permitir lo contrario implicaría desnaturalizar al pagare, que fue creado para circular libremente.-

Dice la Jurisprudencia: *"En cuanto a la adulteración del instrumento este Tribunal tiene dicho que la defensa de falsedad, no puede fundarse en el abuso de firma en blanco, pues ello se refiere a las cualidades intrínsecas del documento lo que no es oponible en el proceso ejecutivo, agregando que la firma puede ser dada en blanco antes de la redacción de lo escrito, confirmando entonces el deudor al acreedor un mandato tácito para proceder a su llenado. Por ello no resulta procedente la excepción de falsedad deducida, toda vez que no se desconoció el libramiento del pagaré, y los argumentos sólo se refieren a que no fue completado en la forma convenida, sin explicar que ello obsta a la autenticidad y a la habilidad del título (Cám. Nac. Com., Sala D, 13/08/93, "Banco Regional de Cuyo S.A. c/ Shader S.A.C.I. s/ Ejec.), Falcon Enrique M. "Procesos de ejecución" - TIA, pág. 336-337, n° 30-c).CCDL Sala 2-Sent. 174 - 15/05/2000. DRES.: MANÇA - ALONSO. CAMARA CIVIL EN DOCUMENTOS Y LOCACIONES SALA 2 S/ COBRO EJECUTIVO. Nro. Sent: 469 Fecha Sentencia 23/12/2013*

Los documentos base de la presente ejecución se encuentran confeccionados y ejecutados en debido tiempo. Nadie lo obligó en ningún momento a firmar el documento y así asumir una obligación de pagar a su

vencimiento. Los pagarés que se ejecutan en este juicio fueron suscriptos indudablemente por el demandado y de plena conformidad con su contenido (fechas, importes, etc.).-

Nos encontramos sin dudas frente a una defensa carente de sustento legal y meramente dilatoria, la cual no puede si quiera ser considerada por V.S., debiéndosela rechazar in – límine con expresa condenación en costas al demandado.-

H).- INSTRUMENTACION DEL PRESTAMO:

Finalmente, adjunto a la presente COPIAS DE MUTUOS FIRMADOS POR LA DEMANDADA, SOLICITANDO UN PLAZO PRUDENCIAL A FIN DE ADJUNTAR LOS ORIGINALES QUE OBRAN EN CAJA FUERTE DE MI MANDANTE EN CASA CENTRAL SITA EN LA CIUDAD DE LA PLATA, PCIA DE BS AS. Tal como lo establece la Doctrina y la Jurisprudencia, lo pagares pueden ser integrados con las estipulaciones del mutuo, o puede aportarse -al proceso- el mutuo mismo, ya sea al momento de interponer la demanda de juicio ejecutivo o bien al momento de contestar excepciones. Cualquiera de estas formas impide se declare la nulidad establecida en la LDC.-

Dice la Jurisprudencia, la cual debe interpretarse a contrario sensu, ya que no es el caso de mi mandante, que siempre instrumenta las operaciones que realiza: "... En efecto, la Ley de Defensa al Consumidor n° 24.240 en el Capítulo VIII "De las operaciones de venta de Créditos" en su art. 36 detalla expresamente el contenido que debe consignarse en las operaciones financieras para consumo, bajo pena de nulidad. La minuciosidad legal obedece a los fines tuitivos de la LDC. La nulidad de la causa acarrearía la nulidad de pagaré que tiene origen en ella. En autos no se omitió cumplir con alguno de los ocho incisos detallados en el art. 36. Simplemente no se instrumentó el mutuo. Esta omisión de la instrumentación del mutuo impide a este Tribunal el control de las cláusulas de otorgamiento del préstamo y el control de los cálculos efectuados para cobrar un hipotético saldo. También impide controlar las tasas de intereses aplicados. Al obrar de esta manera la compañía financiera actora obtuvo para sí una mejora de su posición contractual, obviando contrapartidas para el tomador del crédito, abusando de su condición predominante en un contrato de adhesión. ... Por ello, sería factible declarar la nulidad del contrato y/o de la presente ejecución y/o integrar el contrato conforme lo estatuyen los arts. 36 y 37 de la Ley 24.240, en base a la consideración de los hechos y argumentos del demandado en la oposición de excepciones. DRES.: FAJRE - COURTADE. CAMARA CIVIL EN DOCUMENTOS Y LOCACIONES - Sala 1 S/ COBRO EJECUTIVO Nro. Sent: 269 Fecha Sentencia 29/07/2016.-

A contrario sensu, mi mandante siempre instrumenta las operaciones que realiza.-

Pero más clara y contundente aun es la Jurisprudencia que a continuación transcribo: **COBRO EJECUTIVO: CONTRATO DE MUTUO. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES. TITULO HABIL.** "el contrato de mutuo ejecutado enmarca claramente en las disposiciones del art. 484 procesal en tanto contiene una obligación exigible de dar una suma de dinero líquida o fácilmente liquidable y ha sido reconocido judicialmente. Desde la óptica estrictamente formal, el instrumento contiene la totalidad de los requisitos exigidos para su validez: es escrito, tiene firma reconocida, fecha cierta en relación a las partes, contiene una obligación exigible de dar una suma

de dinero líquida o fácilmente liquidable e identifica claramente a deudor y acreedor; por lo que trayendo aparejada ejecución su habilidad ha sido correctamente valorada por el a-quo. Y en este plano, la legislación de fondo aplicable a los contratos de mutuo (arts. 2240 a 2254 del viejo Cód. Civ.) nada más exigía". DRES.: COURTADE - MOVSOVICH. CAMARA CIVIL EN DOCUMENTOS Y LOCACIONES - Sala 1 S/ COBRO EJECUTIVO Nro. Sent: 352 Fecha Sentencia 02/10/2017.-

El referido fallo dictado en fecha 02/10/17, por la C.C. D.y L. Sala 1 hace expresa mención a la importancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley que rige la materia; requisitos que fueron cumplidos con creces por mi mandante. Téngase presente.-

V.- A LA EXCEPCION DE FALSEDAD MATERIAL- DEBE SER DESESTIMADA POR IMPROCEDENTE: La accionada pretende hacer caer la presente ejecución con la sola negación o desconocimiento de la firma y el ofrecimiento de una prueba Pericial Caligráfica, sin ofrecer o al menos indicar cuales son los documentos indubitados que habrían de servir de base para el examen pericial, y que no son precisamente los pagarés base de la presente acción, debiendo adjuntar la documental necesaria para cotejar las firmas al realizarse la pericial ofrecida, como por ejemplo su DNI. Esto de por sí solo acarrea la improcedencia de la excepción articulada. Así lo ha entendido la jurisprudencia:

"Cuando la excepción opuesta al progreso de la acción es la falsedad, no basta ofrecer la formación de cuerpo de escritura sino que es preciso indicar los documentos indubitados que habrán de servir de base para el examen pericial, aparejando el incumplimiento de dicho recaudo la desestimación sin más trámite de la defensa".- CC0000 TL 8546 RSI - 18 - 86 I 23-6-87. Cosentino, Jose Enrique c/ Podesta, Jose Luis y otro s/ cobro ejecutivo. Mag. VOTANTES: Casarini - Macaya - Lettieri. CC0000 TL 8531 RSI -18-89 I 23-6-87. Sarti, Gerardo H. C/ Idiarte, Ricardo N. S/ cobro ejecutivo. Mag. VOTANTES: Macaya - Casarini - Lettieri.-

a.- Es evidente que la demandada ha suscripto los documentos que se ejecutan en ésta litis. La firma le pertenece y no solo basta con negarla sino que además debía también acompañar un argumento defensivo con una explicación suficiente y los documentos indubitados que habrán de servir a la pericial.-

Digo más, en su escrito pretende introducir cuestiones totalmente ajenas como las manifestaciones acerca de que el llenado del pagare y la aclaración de la firma no son de su puño y letra, lo que es totalmente incoherente. Sabrá la contraria que solo basta que la firma sea de puño y letra, los demás ítems los puede llenar el acreedor. Deudor que firma un pagare sin estar llenados los otros campos del documento asiente que el acreedor los llene.

Con lo que no contó el demandado es que ésta parte también tiene la facultad de ofrecer pruebas en ésta instancia del procedimiento, y no hay duda alguna de que se ofrecerá la misma.-

El demandado al suscribir los documentos, cumplió previamente con ciertos requisitos formales entre ellos presentación de DNI; ahora bien, en dicho DNI consta la firma de puño y letra del deudor y esta parte solicita se tenga a la misma -la firma de dicho documento- como indubitada a los fines de un cotejo pericial en la oportunidad procesal correspondiente.-

Cabe destacar que al momento de oponer excepciones, la demandada no alega ni acerca ninguna denuncia policial y/o penal sobre extravío de su DNI o de la comisión de algún delito con el mismo por persona extraña, por lo que mal puede la demandada alegar que la firma inserta en el mismo no le pertenece. Aceptar esto sería pensar que el DNI le fue sustraído de su propiedad y falsificada posteriormente su firma, pues bien, de ser así, donde está la denuncia policial y/o penal de dicha circunstancia???

Por lo manifestado, y encontrándonos sin duda frente a una defensa meramente dilatoria, solicito su rechazo in – limine con expresa condenación en costas al demandado, pero para el supuesto de que V. S. no lo considere así, dejo desde ya ofrecida prueba.-

Creo que entrar en más detalles es innecesario, resultando clara y abundante la jurisprudencia y la letra de la ley al respecto.-

b- En otro orden de cosas, el demandado – en su afán de pretender evadir el pago de una deuda que legítimamente contrajo con mi mandante – ha omitido uno de los requisitos esenciales para que la excepción tentada resulte procedente, cual es no solo negar la existencia de la deuda, sino demostrar expresamente el interés jurídico que persigue.-

No basta la mera negación formal y genérica.-

Dice la Jurisprudencia: "...además de la simple mención de inexistencia de deuda se debe expresar las circunstancias de hecho que coadyuven a crear una certeza en el magistrado en este sentido"....(sentencia N° 417 fecha 26/05/2000 Coop consumidor de Crédito Vivienda y Consumo Ltda. vs Kochuk arturo s/Cobro de pesos")

"La negativa de la deuda como requisito de admisibilidad de la excepción reviste tal importancia, que en algunos casos, con criterio que compartimos, se exige que esa negativa no se invoque como un mero formalismo, sino que "debe estar seguida de la enunciación precisa y categórica de las circunstancias de hecho que la motivan, de modo que generen en el juez la necesaria certeza de que existen hechos objetivamente ponderables que justifican el desconocimiento como recaudo habilitante de dicha excepción" (Cam Nac Civil Sala A 16/9/96 LL 1 997. C-484) Sentencia N° 278, Fecha 18/8/01 Castillo S.A. vs Noguera Ruben Enrique s/Cobro Ejecutivo"

En conclusión, no basta con una mera negativa de la deuda en forma gral, sino que el demandado debe demostrar expresamente el interés jurídico que persigue con la declaración de falsedad de título. Claro está que no lo hizo porque, la deuda existe y solo se negó la deuda y la firma para cumplir con un ritualismo formal.-

Ante una negativa tan genérica, sin base ni sustento legal ni factico, y a fin de no ser víctima de las maniobras dilatorias de la demandada, y por razones de economía procesal, y conforme a las facultades que el art. 518 del C.P.C.C. le confiere a V. S. solicito que las excepciones opuestas sean desestimadas in limine, si sustanciación alguna, y se proceda al DICTADO DE SENTENCIA DE TRANCE Y REMATE sin más trámite.-

Asimismo, y atento la obstrucción maliciosa del proceso por parte del demandado que niega la firma al solo efecto de dilatar el

69.

proceso, como se probara oportunamente, solicito la aplicación de sanción disciplinaria, consistente en la multa establecida en la ley.-

VI.- OFRECE PRUEBA:

1.- Constancias de autos, en especial los documentos que se ejecutan.-

2.- DOCUMENTAL EN PODER DE LAS PARTES: se intime al demandado a fin de que acompañe copia del DNI.-

3.- PERICIAL CALIGRAFICA: A tal efecto solicito se desinsacule Perito Calígrafo de la lista que a tal fin lleva la Corte Suprema de Justicia. Para el supuesto de que S. S. ordene la realización de la Pericial Caligráfica, ésta parte solicita se tome como instrumento indubitado para el cotejo de firma inserto en el documento base de la acción, el DNI del demandado, quien no solo deberá adjuntar copia (art. 335 del C.P.C.C.T.) sino que deberá presentar el mismo ante el instructor judicial y perito correspondiente. Asimismo se ordene la formación de cuerpo de escritura a los fines de la pericial.-

VII.- SOLICITA PLAZO: Téngase presente las copias de los mutuos que en este acto adjunto y solicito a V.S. me conceda un plazo de 20 días en razón de la distancia atento a que mi mandante tiene su Casa Central en la Ciudad de La Plata, Pcia de Bs As, tal como surge del poder en autos, y toda la documentación original correspondiente a las distintas sucursales distribuidas en todo el Territorio del Pais se encuentran en Archivo Gral de la Empresa actora MAEBA SRL.-

VIII.- PETITORIO:

1) Se tenga por contestado, en tiempo y forma las excepciones planteadas por el demandado.-

2) Se determine continuar con el presente proceso, decretándose la competencia del tribunal interviniente.-

3) Que oportunamente, y en mérito a los contundentes argumentos esgrimidos en el cuerpo de esta presentación, se rechace la excepción articulada y se ordene llevar adelante la ejecución seguida por mi mandante, **con costas**.-

4).- Dejo ofrecida prueba, que no es otra que las antes mencionadas, y las copias de los mutuos referidos cuyos originales serán presentados en tiempo y forma, atento el pedido de plazo aquí efectuado.-

5) Se aplique la sanción disciplinaria solicitada, para el supuesto de que la firma sea de puño y letra del demandado.-

Proveer de conformidad,
SERA JUSTICIA.

Dr. GUSTAVO R. OBELAR
ABOGADO
M.P. N° 4856 - L.º K - Fº 347

DOCYLOC2 CAP 06/MAR/2019 07:43

9/4 copias
super y total en 14/6

EXPTE.:2371/18

JUICIO: MAEBA S.R.L. C/ PEREYRA HECTOR HUGO S/ COBRO EJECUTIVO
(RDS-RECUS.S/CAUSA DEMANDADO-ORIGEN JUZ. DOC. Y LOC. VII NOM.)

S.M. de Tucumán, 21 de marzo de 2019. Por contestado el
traslado en tiempo y forma. Abrase la causa a prueba por el término de quince días.
Personal. VHS 2371/18-

DRA. MARIA VICTORIA GOMEZ TACCONI

JUEZ

JUZGADO CIVIL EN DOC.Y LOC. 2º NOM

MAEBA SRL (RAPICUOTAS)

CUIT 30-71150193-9 - DOMICILIO SOCIAL: CALLE 70 N° 882 La Plata.

**INFORMACIÓN AL CLIENTE Y CONTRATO DE MUTUO
CONDICIONES GENERALES DE SUSCRIPCION DE TITULARES Y SOLICITUD DE PRESTAMOS.**

CLIENTE/TITULAR:

APELLIDO Y NOMBRE:PEREYRA, HECTOR HUGO.....

CUIL/CUIT/CDI:20-13853051-6..... DNI/ LC/ LE:13.853.051.....

FECHA DE NACIMIENTO: 03/ 03/ 1961 NACIONALIDAD:

ESTADO CIVIL:

DOMICILIO PARTICULAR:B° 25 VIVIENDAS CASA 7 S/N NRO. ENTRE Y.....

LOCALIDAD:GRANEROS (TUC.)..... PROVINCIA:TUCUMÁN.....

TELEFONO FIJO: TELEFONO CELULAR:

Solicito a MAEBA SRL con domicilio en SATA 173 el otorgamiento de un préstamo personal, sujeto a su aprobación definitiva bajo las CONDICIONES GENERALES DE CRÉDITO que seguidamente se detallan:

CONDICIONES DE OTORGAMIENTO

1.- GASTOS E IMPUESTOS

- 1.1 Gastos administrativos: 7,23% + IVA
- 1.2 Verificación domiciliaria:
- 1.3 I.V.A. sobre interés:
- 1.4 Información de riesgo crediticio:
- 1.5 Seguro de vida en caso de corresponder:
- 1.6 Gastos de gestión de cobranza en caso de corresponder:

2.- DATOS DEL PRESTAMO

- 2.1 Monto solicitado: 20000
- 2.2 Monto financiado: 35460
- 2.3 Cantidad de pagos: 9
- 2.4 Importe de los pagos: 3940
- 2.5 Vencimiento del primer pago: 10/9/2016
- 2.6 Vencimiento de los restantes pagos: cada treinta días del vencimiento del primer pago
- 2.7 Número del plan: 3-9T
- 2.8 Tasa de interés efectiva anual (TEA): 97,38%
- 2.9 Costo financiero total (CFTNA) c/IVA: 99,47%
(CFTNA) s/IVA: 82,20%
- 2.10 Sistema de amortización: SAPTA CONSTANTE
- 2.11 Intereses punitivos en caso de corresponder:
- 2.12 Sucursal:
- 2.13.- Número de operación comercial
- 2.14.- Los desembolsos serán netos de todo cargo que MAEBA SRL determine corresponda, a saber: retenciones, impuestos, gastos, comisiones o cualquier otro cargo aplicable.

3.- El importe correspondiente al desembolso del préstamo, en caso de ser aprobado, deberá ser abonado al suscripto, y el recibo de este último por el importe en cuestión perfeccionará el cumplimiento de esta solicitud de PRESTAMO por parte de MAEBA SRL.

4.- Declaro bajo juramento que estoy en pleno ejercicio de mis derechos civiles y que la totalidad de la documentación e información que suministre a MAEBA SRL es real y fidedigna, de no ser así se considerará el suministro de la misma como incumplimiento contractual, habilitando a MAEBA SRL a realizar los reclamos y/o acciones correspondientes.

5.- En garantía del préstamo, suscribiré un pagaré a la vista a favor de MAEBA SRL exigible ante cualquier incumplimiento del presente, confiriendo a su vez la vía ejecutiva al presente, por lo que MAEBA SRL podrá iniciar la ejecución con cualquiera de los documentos.

6.- Domicilio de pago. Todos los pagos que deba efectuar, los realizaré en el domicilio de MAEBA SRL, sito en SATA 173, ciudad LA PLATA, en horario y día hábil o, en su defecto, donde este lo indique en el futuro, bajo el mecanismo establecido en la cláusula 7.

7.- Cesión: Todos los derechos a favor de MAEBA SRL, conforme al presente podrán ser cedidos sin necesidad de notificar al deudor cedido en los términos del artículo 72 inc. (a) de la ley 24.441, cuando tal cesión tuviera por objeto garantizar la emisión de títulos valores mediante oferta pública, constituir el activo de una sociedad (o de un fideicomiso) con el objeto de que emita títulos valores ofertables públicamente y cuyos servicios de amortización e intereses estén garantizados con dicho activo, y/o constituir el patrimonio de un fondo común de créditos. MAEBA SRL podrá ceder los derechos y créditos dispuestos en el presente, sin necesidad de notificarme, sin restricciones de ningún tipo, ni autorización en particular.

8.- SEGUROS: En caso de exigirlo la normativa vigente, MAEBA SRL me ofrecerá la posibilidad de elegir entre distintas compañías aseguradoras debidamente autorizadas para operar en el mercado, por una suma asegurada equivalente al importe del PRESTAMO solicitado más intereses, siendo MAEBA SRL el beneficiario de dicho seguro, que se contratará conforme a las normas legales. El costo del seguro estará exclusivamente a mi cargo, debiendo abonar los importes respectivos a la prima del seguro contratado al momento de la liquidación del PRESTAMO o cuando MAEBA SRL lo disponga.

MORA

8.- La mora en el pago de las cuotas como así también de cualquier obligación adicional convenida, se producirá de pleno derecho por el sólo vencimiento de los plazos acordados, sin necesidad de aviso previo alguno, judicial o extrajudicial. Producida la mora, la deuda se tendrá como de plazo vencido y MAEBA SRL podrá exigir el pago íntegro de todo lo adeudado, ya sea en concepto de capital, intereses, gastos y demás accesorios.

Dr. GUSTAVO R. OBELAR
ABOGADO
M.P. N° 4856 - L° X - C° 347

9. Producida la mora, y por todo el tiempo que dure la misma, deberé abonar un interés punitivo, cuya tasa será del% (.....) de los intereses compensatorios pactados, los que se adicionarán a estos últimos.

10.- MAEBA SRL no estará obligado a recibir pagos parciales y, si lo hiciera, estos en ningún modo cancelarán las obligaciones del presente, hasta tanto MAEBA SRL no reciba la obligación completa adeudada. Los pagos parciales y/o entrega de dinero a cuenta, luego de operada la mora, no implicarán en ningún caso quita, espera, remisión o novación de las obligaciones o acciones.

11.- Los codeudores que suscriban eventualmente el presente, asumen la total responsabilidad por las obligaciones a cargo del CLIENTE (tomador del préstamo) en calidad de tales. Los codeudores, se constituyen en obligados en forma personal y solidaria, además de lisos, llanos y principales pagadores del deudor con la totalidad de sus bienes, renunciando desde ya, a los derechos de división y excusión, conforme los artículos 1590,1591 del Código Civil, por la totalidad de las obligaciones contenidas en la presente solicitud, por lo que constituyen domicilio especial a estos efectos en el indicado al pie del presente

DECLARACIONES

12 - AUTORIZACION EXPRESA: Autorizo expresamente a MAEBA SRL para que en caso de incumplimiento en el pago de las operaciones realizadas entre el TITULAR y la misma, trabé el embargo de mis haberes, renunciando expresamente a los beneficios que otorga el art. 744 inc h) del CCCN, el decreto 6754/43 ratificado por ley 13.894; y/o ley 24.241, como asimismo de cualquier otra ley, sea de carácter nacional o provincial, creada o a crearse, que otorgue iguales o similares beneficios a los concedidos por las citadas leyes y/o decretos. La renuncia que por éste acto se efectúa es comprensiva del capital, intereses que pudiere devengar dicha suma, sean éstos moratorios o punitivos, como así también por los gastos, honorarios y aportes de carácter judicial o extrajudicial emergentes del incumplimiento de la obligación. Autorizo en forma expresa a MAEBA SRL Y/O RESPONSABLES a efectuar llamadas, enviar mensajes de texto y/o audio a los números telefónicos denunciados oportunamente como medio de contacto. Dichas llamadas serán efectuadas en días hábiles y horarios razonables, renunciado expresamente a invocar los beneficios que establece la Ley 24.240 (Defensa del Consumidor), Ley 25.326 (Protección de Datos Personales) y/o Ley 26.951.

13.- CONSENTIMIENTO DEL INFORME DE DATOS PERSONALES. DECLARO BAJO JURAMENTO que, los responsables de MAEBA SRL, con domicilio en calle 70 N° 882 de la ciudad de La Plata, me han informado previamente y notificado del contenido del art. 6 de la ley 25.326 de Protección de datos personales - Habeas Data, motivo por el cual es de mi conocimiento que mis datos personales relacionados con las operaciones que concertaré con la mencionada firma serán inmediatamente informados y registrados en la base de datos de informes comerciales que la empresa determine, quien suministrara información comercial relativa a la solvencia económica y al crédito a sus asociados abonados con la finalidad que estos puedan evaluar y decidir sobre el eventual otorgamiento del crédito, por lo que impuesto de todo ello PRESTO CONSENTIMIENTO para que mis datos y antecedentes personales, laborales, comerciales, financieros o de otra índole (salvo los previstos en el art. 7 de la mencionada ley), así como mis eventuales incumplimientos, sean registrados en la base de datos de la mencionada y puedan ser cedidos a sus asociados abonados.

14.- En caso de efectivizarse el préstamo solicitado, cuando sea cancelado, me comprometo a retirar de la oficina donde se halla radicado, el pagaré suscripto oportunamente. De no realizar dicho trámite dentro de los ciento ochenta (180) días de haberse cancelado la deuda, autorizo a MAEBA SRL a que proceda a su destrucción de oficio.

15.- La/las firma/firmas en el presente obrará/obrarán como constancia plena para MAEBA SRL de que he recibido copia de la presente solicitud.

16.- PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO: En cumplimiento de las leyes y normas particulares emanadas de la Unidad de Información Financiera (UIF), las que declaro conocer y aceptar, declaro bajo juramento que: 1.- la información y datos identificatorios consignados en la presente solicitud y demás documentación anexa, son exactos y verdaderos 2.- Los fondos y valores a utilizar para el repago de las obligaciones contempladas en esta solicitud, tienen origen en actividades lícitas. 3.- La documentación respaldatoria presentada en virtud de la citada norma es copia fiel del original.

17.- PUBLICIDAD: Presto mi irrestricto consentimiento expreso a los fines de que mis datos personales de contacto sean utilizados en campañas publicitarias a desarrollar por la firma por medios escritos, mensajería, SMS, llamados telefónicos u otra modalidad similar, en los términos del art. 8 inc. e) de la Ley 26951, su normativa complementaria y/o modificatoria.

18.- Jurisdicción. En caso de controversia judicial, constituyo domicilio en los indicados en esta solicitud y acepto expresamente la competencia de los Juzgados Ordinarios Nacionales de Primera Instancia en lo Civil y Comercial con asiento en la Ciudad con exclusión de todo otro fuero o jurisdicción.

Lugar

Fecha

Declaro haber leído y que se me ha informado el contenido de la presente información.

Firma

Firma

Aclaración

Aclaración

DNI

DNI

Domicilio

Domicilio

VEINTE MIL

20000

CONSTANCIA DE ENTREGA

Recibí de conformidad de MAEBA SRL la suma de pesos (\$.....) por la operación Número También manifiesto mi conformidad con la recepción del producto En los términos del artículo 58 del Decreto Reglamentario de la Ley 23.349 del impuesto al valor agregado o el que en el futuro lo reemplace.

Firma

Firma

Aclaración

Aclaración

DNI

DNI

Domicilio

Domicilio